



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/1994/104/Add.25
19 de octubre de 2001

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

Período de sesiones sustantivo de 2002

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Tercer informe periódico presentado por los Estados Partes
de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Adición

ISLANDIA*

[8 de octubre de 2001]

* El segundo informe periódico presentado por el Gobierno de Islandia (E/1990/6/Add.15) fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 20º período de sesiones, en 1999 (véase E/C.12/1999/SR.3 a 5).

La información presentada por Islandia de conformidad con las directrices relativas a la parte inicial de los informes de los Estados Partes figura en el documento básico (HRI/CORE/1/Add.26).

ÍNDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. OBSERVACIONES GENERALES.....	1 - 14	3
II. INFORMACIÓN RELATIVA A CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE LAS PARTES I, II Y III DEL PACTO	15 - 200	7
Artículo 1.....	15	7
Artículo 2.....	16	7
Artículo 3.....	17 - 25	7
Artículos 4 y 5	26	10
Artículo 6.....	27 - 45	10
Artículo 7.....	46 - 60	14
Artículo 8.....	61	20
Artículo 9.....	62 - 101	20
Artículo 10.....	102 - 139	28
Artículo 11.....	140 - 157	36
Artículo 12.....	158 - 172	41
Artículos 13 y 14	173 - 198	44
Artículo 15.....	199 - 200	48

I. OBSERVACIONES GENERALES

1. En la siguiente descripción general se exponen las leyes y la práctica más importantes en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Por lo que respecta a la información general sobre Islandia y su población, el sistema jurídico islandés, las facultades para resolver si se violan derechos humanos, y la aplicabilidad de las convenciones internacionales de derechos humanos en la legislación nacional se hace referencia a las observaciones generales presentadas en el informe inicial de Islandia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante el "Pacto"), pues esos aspectos no han variado, salvo que se hagan observaciones particulares en otro sentido.

2. En cuanto a las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 7 de mayo de 1999, después de examinar el segundo informe periódico, las respuestas a las preocupaciones y sugerencias del Comité se tratan expresamente en relación con el artículo pertinente del Pacto. Sin embargo, con respecto a la solicitud del Comité de nueva información sobre la jurisprudencia relativa a la aplicación del Pacto y al rango jurídico nacional del Pacto (párrafo 18 de las observaciones finales), esas cuestiones se tratan en los siguientes párrafos.

A. Protección constitucional de los derechos económicos, sociales y culturales

3. Procede destacar que, como se declaraba en el segundo informe periódico, se modificaron mucho en 1995 las disposiciones sobre derechos humanos de la Constitución islandesa mediante la Ley constitucional N° 97/1995. Se hace referencia al párrafo 4 del segundo informe periódico, donde se enumeran derechos nuevos y modificados, incorporados en la Constitución. La enmienda refleja en gran medida las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también de convenciones internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, como la Carta Social Europea y el Pacto. En consecuencia, en la Constitución se introdujeron varios cambios en las disposiciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, y se agregaron nuevos derechos. La principal disposición de la Constitución sobre esos derechos es el artículo 76, que reza como sigue:

"El derecho a la ayuda en caso de enfermedad, discapacidad, vejez, desempleo y otras situaciones comparables será garantizado por ley a todos los que lo necesiten.

El derecho a la educación general y a una formación apropiada será garantizado por ley a todos.

Los niños tendrán garantizados por ley la protección y el cuidado necesarios para su bienestar."

4. Los derechos económicos y sociales se protegen también en otras disposiciones de la Constitución, como el artículo 75, que protege derechos similares a los del artículo 23 del Pacto. En esta disposición se estipula que toda persona es libre de elegir su empleo. Además, según esta disposición, el derecho de las personas a negociar su remuneración y otras condiciones de trabajo y derechos conexos se determinará por ley. La libertad sindical está protegida en el artículo 74 de la Constitución, redactado en términos similares a los del artículo 11 del Convenio

Europeo de Derechos Humanos, al párrafo 1 del artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al párrafo 4 del artículo 23 del Pacto. Sin embargo, va más allá que esas disposiciones al declarar que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Esta disposición se recoge en un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Sigundur Sigurjonsson c. Islandia, de 30 de junio de 1993, en que se consideró que la pertenencia obligatoria a una asociación viola el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

5. Por último, en 1995 se agregó una importante disposición en la Constitución, que es el principio de igualdad. El artículo 65 de la Constitución reza como sigue:

"Todos serán iguales ante la ley y gozarán de los derechos humanos sin distinción de sexo, religión, opinión, origen nacional, raza, color, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos en todos los aspectos."

6. Esta disposición está redactada en términos similares a los del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A este respecto, procede agregar que Islandia ha firmado el Protocolo N° 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el principio de igualdad de derechos y prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico y por otros motivos. Ese protocolo protege contra toda discriminación, sea cual fuere el derecho de que se trate, en forma análoga al artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo N° 12 se encuentra en fase de ratificación.

7. Procede señalar que en el informe explicativo sobre el proyecto para modificar la Constitución se hace una clara referencia al uso de convenciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos, entre ellas el Pacto, como principios orientadores para interpretar la Constitución. En el artículo 75 de la Constitución se hace referencia al artículo 6 del Pacto, y en el artículo 76 a los artículos 11, 12 y 13 del Pacto. Esto establece una clara relación entre la Constitución y los instrumentos de derechos humanos como el Pacto, que han influido ya en la práctica judicial islandesa y en la aplicación de la Constitución.

B. Aplicación del Pacto en el sistema jurídico islandés

8. Puede afirmarse que las nuevas disposiciones sobre derechos humanos contenidas en la Constitución han ampliado la protección constitucional de varios derechos garantizados en las convenciones internacionales sobre derechos humanos. A pesar de que esas convenciones no tengan fuerza de ley directamente en el sistema jurídico islandés, están ahora protegidas por la Constitución como resultado de una reciente práctica judicial, según la cual las disposiciones constitucionales se han interpretado teniendo en cuenta las obligaciones internacionales. Claro ejemplo de ello es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que se ha hecho referencia directamente en un reciente fallo del Tribunal Supremo en el sentido de que protege derechos sociales sustantivos. También han aumentado considerablemente las referencias al artículo 65 de la Constitución sobre el principio de igualdad en el contexto de casos relativos a todos los derechos humanos.

9. En un fallo del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2000, el Tribunal dictaminó que una nueva ley que reducía los pagos de la seguridad social a personas discapacitadas violaba el derecho a prestaciones sociales mínimas que garantiza el párrafo 1 del artículo 76 de la Constitución, interpretado a la luz del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el dictamen se declaró asimismo que el párrafo 1 del artículo 76 debe interpretarse a la luz de los artículos 11 y 12 del Pacto. Además, se hizo referencia al artículo 65 de la Constitución sobre el principio de igualdad respecto a la cuestión de si el nivel de las prestaciones de seguridad social pagadas a una persona discapacitada debe vincularse a los ingresos del cónyuge de esa persona. En consecuencia, esa legislación se consideró inconstitucional, y por lo tanto no fue aplicada por el Tribunal. El dictamen, en que se pedía que se modificara la legislación, dio lugar al inicio de un gran debate en la sociedad irlandesa, sobre todo con respecto a la función de los tribunales en el ámbito de los derechos sociales.

10. Procede mencionar otro dictamen a este respecto. En un fallo de 4 de febrero de 1999, el Tribunal Supremo dictaminó que la universidad de Islandia no había cumplido su obligación legal en virtud de la Ley sobre las personas discapacitadas, artículo 2 del Protocolo N° 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la educación, y artículo 65 de la Constitución sobre el principio de igualdad. Se trataba de una alumna ciega que no recibió la asistencia necesaria en la universidad para cursar sus estudios. No se habían adoptado medidas positivas para ayudarla ni para formular una política general con el fin de ayudar a las personas discapacitadas, y la universidad está obligada legalmente a hacerlo, de manera que las personas discapacitadas puedan gozar de su derecho a la educación lo mismo que los demás. En consecuencia, se estimó que se violaba la Constitución y que esa persona debía ser indemnizada.

11. Por último, debe mencionarse un dictamen sobre los derechos de personas sordas. En un fallo de 6 de mayo de 1999 el Tribunal Supremo decretó que el Servicio de Radiodifusión Estatal tenía la obligación de difundir por televisión programas sobre una campaña electoral en lenguaje de signos. Eso se decidió con referencia a la obligación legal del Servicio de Radiodifusión Estatal de presentar a los representantes de diversos partidos políticos para las elecciones al Parlamento en igualdad de condiciones para toda la nación. De conformidad con el artículo 65 de la Constitución y el derecho a elecciones libres previsto en el artículo 3 del Protocolo N° 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se consideró que se habían infringido los derechos de las personas sordas y que el Servicio de Radiodifusión Estatal estaba obligado a difundir la campaña en lenguaje de signos.

12. Procede señalar que, debido a las citadas enmiendas en la Constitución y a la práctica de los tribunales, como la seguida en los ejemplos citados, se ha iniciado un animado debate y la población conoce mucho mejor los derechos humanos en la sociedad islandesa. Por lo tanto, la población de Islandia está mejor informada de sus derechos que nunca, y sabe que esos derechos se aplican mediante el ordenamiento jurídico islandés y los órganos internacionales de vigilancia.

C. Resumen de las enmiendas a la legislación

13. Por último, en estas observaciones generales se expone un resumen de algunas de las enmiendas legislativas más importantes aprobadas desde que se presentó el segundo informe. En relación con las disposiciones correspondientes del Pacto se hacen más consideraciones sobre esas enmiendas:

- a) La Ley sobre el seguro de los pacientes, N° 111/2000, garantiza el derecho de los pacientes a indemnización en determinadas condiciones por daños relacionados con la investigación o causados por un tratamiento recibido en un hospital, centro de atención primaria de la salud o en otras instituciones sanitarias, así como por profesionales sanitarios autónomos o durante el transporte del paciente.
- b) El 6 de junio de 2000 entró en vigor una nueva Ley de igualdad de género, N° 96/2000. La legislación se revisó por dos razones principales: por un lado, para tener en cuenta los cambios que se han producido en la igualdad de género y en la importancia que se concede a los objetivos y a la metodología, y, por otro, para estimular el avance hacia la igualdad en esferas importantes de la sociedad.
- c) En 2000 se promulgó una nueva Ley de licencia de maternidad, paternidad y parental, N° 95/2000, que entrará plenamente en vigor el 1° de enero de 2003. Su principal objetivo es crear las condiciones para que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el empleo remunerado y otros cometidos fuera del hogar, y garantizar el tiempo dedicado a los hijos por ambos progenitores.
- d) Se promulgó una nueva Ley sobre una base de datos en el sector de la salud, N° 139/1998, con el fin de autorizar la creación y el funcionamiento de una base centralizada de datos de salud no identificables personalmente que figuran en registros médicos, con miras a disponer de un mayor conocimiento para mejorar la salud y los servicios sanitarios.
- e) El 1° de enero de 1999 entró en vigor una nueva Ley de la vivienda, N° 44/1998, cuya finalidad es que los islandeses gocen de seguridad y de iguales derechos en el ámbito de la vivienda, mediante la concesión de préstamos y la organización de asuntos relacionados con la vivienda, todo ello unido a la asignación especial de fondos para que la población tenga mayores posibilidades de adquirir o alquilar viviendas en condiciones razonables.
- f) La Ley sobre los derechos de los pacientes, N° 74/1997, garantiza varios derechos de los pacientes, como el de recibir información sobre su estado de salud, el tratamiento propuesto y la posibilidad de solicitar una segunda opinión. Para el tratamiento o la participación en una investigación científica se requiere el consentimiento fundamentado del paciente.
- g) Mediante una nueva Ley de capacidad jurídica, N° 71/1997, que eleva de 16 a 18 años la edad en que las personas tienen capacidad jurídica para decidir sobre sus asuntos. El motivo es que debe seguirse la definición de la Convención

sobre los Derechos del Niño, es decir, toda persona menor de 18 años. Además, el régimen islandés se consideraba distinto del vigente en los países vecinos.

- h) En 1997 se produjeron grandes cambios con respecto a la legislación laboral, con la promulgación de la Ley sobre medidas en el mercado laboral, N° 12/1997, y la Ley de seguro de desempleo, N° 13/1997, que entraron en vigor en junio de 1997.

14. En la página en Internet del Ministerio de Asuntos Sociales (<http://www.felagsmalaraduneyti.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/english-index>) figura la mayoría de la legislación sobre asuntos sociales considerada en el presente informe, con la traducción completa al inglés. La legislación correspondiente al Ministerio de Salud y Seguridad Social puede obtenerse en inglés en: <http://heilbrigdisraduneyti.is/interpro/htr/htr.nsf/pages/lawsandregs>.

II. INFORMACIÓN RELATIVA A CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES DE LAS PARTES I, II, Y III DEL PACTO

Artículo 1

15. Desde que se presentó el segundo informe periódico no ha habido enmiendas ni cuestiones jurídicas específicas sobre este artículo.

Artículo 2

16. Cabe remitirse a los párrafos 8 a 13 del segundo informe periódico. En cuanto al párrafo 2 del artículo 2 sobre la protección contra la discriminación en el ejercicio de los derechos, se remite especialmente al artículo 65 de la Constitución islandesa. En esta disposición se declara el principio de igualdad y que todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos sin distinción alguna por motivos de sexo, religión, opinión, origen nacional, raza, color, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La referencia a todos los derechos humanos abarca claramente la totalidad de los derechos enumerados en las convenciones internacionales sobre derechos humanos de que es Parte Islandia, incluidos los derechos incorporados en el Pacto.

Artículo 3

17. La ley islandesa se basa en el principio de que todas las personas son iguales ante la ley, independientemente de su sexo. El principio general de igualdad está consagrado en el artículo 65 de la Constitución, según se ha dicho, y se remite especialmente a la igualdad de género contemplada en el párrafo 2 del artículo. Desde 1976 está en vigor en Islandia una ley de igualdad de género especial. Esta ley representa un importante instrumento para apoyar la labor en el ámbito de la igualdad de género y la protección de la igualdad social, pero también hace tiempo que se reconoce que la labor para lograr la igualdad abarca el cambio de actitudes con respecto a las funciones e imágenes sexuales tradicionales. Por lo tanto, se requiere una continua crítica social, así como investigaciones y medidas especiales para avanzar hacia nuevas ideas. Es importante que el mayor número posible de personas participe en esta labor, en la que las autoridades políticas desempeñan una de las funciones esenciales. La Ley de igualdad de género

y el plan de acción del Gobierno de Islandia figuran entre las contribuciones del Gobierno para alcanzar ese objetivo.

Una nueva Ley de igualdad de género

18. El 6 de junio de 2000 entró en vigor una nueva Ley de igualdad de género, N° 96/2000. La legislación se revisó por dos razones principales: por un lado, para tener en cuenta los cambios que se han producido en la igualdad de género y en la importancia que se concede a los objetivos y a la metodología, y, por otro, para estimular el avance hacia la igualdad en esferas importantes de la sociedad. Por lo tanto, cuando se revisó la ley anterior se prestó atención a la situación relativa a la igualdad de género a nivel ejecutivo y a la elaboración de proyectos concretos que sirvieran de base. También se insistió en que la igualdad de género había de tomarse seriamente, como responsabilidad de ambos sexos.

19. En la ley figuran nuevos aspectos como el establecimiento de una institución especial, el Centro para Igualdad de Género (Jafnréttisstofa), administrado por el Ministerio de Asuntos Sociales, que tiene confiada la vigilancia de la aplicación de la ley. Además, cada ministerio tiene que designar un funcionario especial sobre igualdad de género para verificar las cuestiones de igualdad de su competencia. La ley contiene disposiciones sobre la integración de la familia y la vida profesional; está destinada a satisfacer la creciente demanda de mujeres de que se les acepte como miembros totalmente válidos de la fuerza de trabajo y de que los hombres desempeñen una función más importante en sus familias.

20. También contiene disposiciones sobre el acoso sexual, la prohibición del despido de un trabajador o trabajadora por haber tratado de obtener reparación por supuesta discriminación sexual, y una disposición que obliga a las empresas con más de 25 empleados a crear programas de igualdad o a tomar disposiciones especiales con respecto a la igualdad de género en sus políticas de empleo. Por último, existe una disposición especial sobre el análisis de datos estadísticos basado en el género.

Plan de acción cuatrienal sobre igualdad de género

21. En la Ley de igualdad de género figura una disposición según la cual el Ministro de Asuntos Sociales ha de presentar propuestas al Althing sobre un plan de acción cuatrienal relativo a la igualdad de género. En 1998, el Althing aprobó una resolución parlamentaria por la que aprobaba el plan cuatrienal de Gobierno sobre la igualdad de género, que se está aplicando. En la primera sección del plan se especifican los dos fines principales del Gobierno sobre la igualdad de género: cooperación entre los sexos e integración de las consideraciones de igualdad en toda formulación de políticas y adopción de decisiones. Ambas son importantes para promover la igualdad de género. En la segunda sección del plan se describen con detalle los proyectos del Gobierno. Éstos abarcan las funciones de la mayoría de los ministerios, sino de todos, y en realidad exponen las líneas generales de la política de igualdad de género del Gobierno. Esos proyectos son los siguientes:

- análisis de todos los datos estadísticos por género;
- investigaciones para determinar si en la política pública se tiene en cuenta la igualdad de género;

- igualdad de género en las instituciones públicas y medidas para erradicar la discriminación salarial por motivos de género;
- estudios sobre la posición de las mujeres con respecto al poder económico.

22. En la tercera sección del plan de acción del Gobierno se enumeran las tareas que han de realizar los distintos ministerios. Se mencionan unas 70, que abarcan todos los aspectos de la sociedad. Entre los ejemplos figuran la división de grupos y la adopción de reglas sobre las elecciones, de manera que las mujeres tengan más posibilidades de ser elegidas en general, y en las elecciones para los gobiernos locales en particular; una campaña en todos los ministerios para aumentar el número de mujeres en los comités y en los consejos ministeriales; la designación de comités sobre igualdad de género en todos los ministerios; la organización de cursos sobre cuestiones de derechos humanos, insistiendo en los derechos de la mujer; la adopción de medidas contra el acoso sexual y el apoyo a empresas comerciales en que intervengan mujeres.

Permiso de maternidad, paternidad y parental

23. En 2000 se promulgó una nueva Ley de licencia de maternidad, paternidad y parental, N° 95/2000, que entrará plenamente en vigor el 1° de enero de 2003 (en la parte relativa al artículo 10 hay mucha más información sobre la ley). Su principal objetivo es crear las condiciones para que hombres y mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en el empleo remunerado y otros cometidos fuera del hogar, y garantizar el tiempo dedicado a los niños por ambos progenitores. La finalidad de la ley es también combatir la discriminación salarial por motivos de género, atribuida en parte a que las mujeres necesitan con más frecuencia que los hombres adaptar su tiempo de trabajo para cuidar a los hijos.

Apoyo a las empresas comerciales en que intervienen mujeres

24. En los últimos años, el Ministerio de Asuntos Sociales ha concedido subvenciones a nuevas empresas comerciales considerando que probablemente aumentarían la participación de empleo de las mujeres. En 2001, el Ministerio autorizó la concesión de 20 millones ISK para apoyar el empleo de las mujeres. La principal finalidad de esas subvenciones es lograr una mayor variedad en el sector comercial, mantener la viabilidad de centros de población en las zonas rurales y ampliar la gama de oportunidades en ellas, facilitar el acceso a las mujeres a capital para la primera inversión y reducir el desempleo entre las mujeres.

Fondo de Garantía de Préstamos a las Mujeres

25. El Fondo de Garantía de Préstamos a las Mujeres es una empresa mixta en que intervienen el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Industria y la ciudad de Reykjavík. El principal objetivo del Fondo es apoyar a las mujeres para iniciar nuevas empresas comerciales garantizando hasta la mitad de los préstamos que reciben del Banco Nacional de Islandia para financiar proyectos concretos. La garantía se concede después de evaluar la rentabilidad de la empresa comercial.

Artículos 4 y 5

26. Desde que se presentó el segundo informe no se han producido cambios legislativos ni novedades específicos en relación con los principios expuestos en esos artículos del Pacto por lo que se refiere a la interpretación de leyes e instrumentos internacionales.

Artículo 6

27. Desde la última reseña de estos asuntos en el segundo informe se han producido considerables cambios en el marco jurídico en todos los aspectos de la administración en materia de empleo.

Ley sobre medidas en el mercado laboral, N° 13/1997

28. En 1997 tuvieron lugar grandes cambios en la legislación laboral, con la promulgación de la Ley sobre medidas en el mercado laboral, N° 12/1997, y la Ley de seguro de desempleo, N° 13/1997. Ambas leyes entraron en vigor el 1° de julio de 1997. El primer cambio con respecto a la legislación anterior es que una institución especial, la Dirección General de Trabajo, está encargada de las oficinas de empleo en Islandia. La Dirección es responsable ante el Ministro de Asuntos Sociales, que designa su junta por períodos de cuatro años, y en la que figuran representantes de los agentes sociales, de las autoridades locales y del Fondo de Seguro de Desempleo. La junta es responsable de verificar la situación del mercado laboral y de los resultados de las medidas aplicadas en él. El Ministro informa luego anualmente al Althing sobre las tendencias en el mercado laboral; sus informes se basan en los preparados por la junta de la Dirección General.

29. Según la nueva legislación, Islandia es ahora una sola zona de empleo, con ocho oficinas de empleo regionales que funcionan en regiones determinadas. El Ministro de Asuntos Sociales designa un consejo regional especial para cada región, integrado por representantes de las organizaciones que intervienen en el mercado laboral, las autoridades locales y las escuelas secundarias de las regiones. Los consejos regionales tienen que seguir la evolución en el sector del empleo y formular propuestas a la junta de la Dirección General de Trabajo sobre las medidas aplicadas en el mercado laboral. El consejo regional ha de ayudar también a las oficinas de empleo regionales a aplicar medidas para ayudar a los desempleados. La junta de la Dirección General y los consejos regionales tienen que tratar de ofrecer soluciones a los desempleados, a fin de atender las demandas del mercado laboral en cuanto a calificaciones y aptitudes para el trabajo.

30. Según la Ley sobre medidas en el mercado laboral, las oficinas de empleo regionales tienen que elaborar un plan de búsqueda de empleo en consulta con cada persona que busque trabajo en las diez semanas que siguen a su registro como desempleados. La finalidad de este plan es ayudar a quienes buscan empleo a hallar un trabajo apropiado. Hay que concebir planes para aumentar la probabilidad de éxito de quienes buscan empleo. Consultores especiales que trabajan con las oficinas de empleo regionales están encargados de elaborar planes de búsqueda de empleo.

31. Para aumentar las aptitudes para el empleo y las posibilidades de los parados, las oficinas de empleo regionales ofrecen lo siguiente:

- a) Medidas de introducción al empleo, que abarcan breves períodos en lugares de trabajo sin intervenir realmente en las actividades.
- b) Formación para el empleo, es decir, participación organizada del solicitante de empleo en la actividad en un lugar de trabajo durante determinado período, sin compromiso alguno por el empleador con respecto a su contratación. Durante la formación para el empleo, el consultor de la oficina de empleo ha de evaluar la capacidad de trabajo del solicitante, en consulta con el capataz en el lugar de trabajo. Los desempleados durante seis meses o más tienen prioridad de acceso a la formación en el empleo, dándose preferencia a los desempleados durante un año o más. Esta condición tiene excepciones en el caso de personas mayores, discapacitados, ex presos y toxicómanos reformados. El período máximo de formación para el empleo durante el cual la persona que busca trabajo recibe el subsidio de desempleo es de seis meses.
- c) Contratación a prueba, según la cual los empleadores contratan a los solicitantes de empleo a título experimental con vistas a hacerlo permanentemente si el resultado es satisfactorio. Esto puede aplicarse a las personas desempleadas durante largos períodos (seis meses o más). El período máximo de contratación a prueba es de tres meses, durante el cual el solicitante de empleo recibe todo el subsidio de desempleo. En los programas de formación para el empleo y contratación a prueba, el empleador paga al solicitante de empleo la diferencia entre el subsidio de desempleo y el sueldo a que tiene derecho según los acuerdos salariales válidos.

32. Además de dichas medidas existe un servicio especial para los adolescentes, los discapacitados y las personas de edad, que pueden dirigirse a su oficina de empleo regional para solicitar asistencia en la búsqueda de empleo.

33. Según el Reglamento N° 670/1998 sobre las medidas en el mercado laboral, la Dirección General de Trabajo es la encargada de las medidas aplicadas en el mercado laboral por quienes actúan como intermediarios para la contratación o el registro de los desempleados, los cuales están obligados a proporcionar la información solicitada por la Dirección General de Trabajo sobre las actividades, con inclusión del número de personas que solicitan empleo, los puestos vacantes y el número de personas contratadas.

Reglamento N° 238/1999 sobre la asignación de subvenciones del Fondo de Subsidio de Desempleo para proyectos especiales administrados por las oficinas de empleo regionales

34. La junta del Fondo de Subsidio de Desempleo puede apoyar proyectos especiales ejecutados por las autoridades locales para estimular el empleo de conformidad con las normas establecidas. La cantidad máxima equivale al subsidio de desempleo y a los pagos de la caja de pensiones que en otro caso se hubieran hecho a las personas cuyos nombres se suprimen del registro de desempleo como resultado de su participación en los proyectos. Entre los ejemplos de esas asignaciones cabe citar: subvenciones a personas desempleadas para que puedan establecerse por su cuenta, subvenciones para ayudar a empresas a crear nuevos empleos en relación con nueva producción y subvenciones para que personas registradas como desempleadas puedan seguir la formación profesional.

Consejo de Formación Profesional del Ministerio de Asuntos Sociales, que funciona en virtud de la Ley N° 19/1992 sobre formación profesional (sector empresarial)

35. La principal función del Consejo de Formación Profesional es colaborar en la formulación de políticas para la formación profesional en el sector empresarial, y el Fondo de Formación Profesional, que administra, interviene mucho en esta labor. Desde su creación hasta el año 2000 ha concedido 438 millones ISK para unos 610 proyectos de formación profesional con el fin de elevar las calificaciones del personal y de reforzar la situación de los sectores empresariales y profesionales en Islandia.

36. Los primeros fondos para formación profesional en el sector empresarial se concedieron con cargo al presupuesto de 1998; ese año, el Ministerio de Asuntos Sociales disponía para tal fin de 9 millones ISK. En 1991 la asignación se aumentó a 15 millones de ISK. En 1992, al promulgar el Althing la Ley de formación profesional (sector empresarial), se asignaron al Fondo de Formación Profesional 48 millones ISK, permaneciendo la asignación anual a ese nivel hasta 1998, en que se elevó a 50 millones ISK. Esta última cifra se ha aplicado en los años 1999 y 2000.

Cuadro 1

Asignaciones para formación profesional, 1995-2000

Año	Número de solicitantes	Número de proyectos	Total solicitado (ISK)	Número de beneficiarios	Total concedido (ISK)	Número de proyectos
1995	32	90	96.060.482	21	43.501.000	46
1996	49	130	141.033.822	29	47.495.614	67
1997	55	138	162.178.261	31	45.652.821	69
1998	59	170	201.759.158	40	63.000.387	106
1999	77	245	276.757.462	53	55.750.000	101
2000*	69	160	234.288.500	37	39.288.500	60

* Las cifras de 2000 comprenden proyectos de investigación y desarrollo.

Fjölsmiðjan, entidad social, educativa y de apoyo para el empleo

37. Fjölsmiðjan es una institución privada que dirige un centro de formación profesional y de producción. Se trata de una entidad social, educativa y de apoyo para el empleo dedicada a los jóvenes de 16 a 24 años, con el fin de desarrollar su personalidad y de prepararlos para continuar los estudios o participar en el mercado del empleo privado. Fjölsmiðjan tiene su origen en una encuesta realizada por la Cruz Roja Islandesa entre las personas más marginadas de la sociedad islandesa. Según la encuesta, en el grupo de 16 a 24 años de edad había personas con muy poca instrucción. La Cruz Roja buscó una manera eficaz de mejorar la situación de esas personas, y sus investigaciones condujeron a las escuelas de producción danesas, que habían obtenido los mejores resultados para ese grupo de edad en Europa.

38. En 1998, el Ministerio de Asuntos Sociales creó un grupo de trabajo para estudiar la necesidad de establecer un sistema similar, tomando como modelo la escuela de producción

danesa, aunque adaptándolo a las condiciones de Islandia. El grupo llegó a la conclusión de que la medida era necesaria, por lo que el Ministro de Asuntos Sociales encargó al grupo la tarea de aportar ideas para el establecimiento de esa escuela.

39. Fjöslsmiðjan, que es el fruto de esa labor, fue creada en marzo de 2001 por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Dirección General de Trabajo, la Cruz Roja Islandesa, la ciudad de Reykjavík y otras autoridades locales, y el Ministerio de Educación. Se ha previsto que las operaciones comiencen en octubre de 2001, y se basarán inicialmente en 40 a 60 participantes en seis departamentos. Los participantes percibirán un sueldo mientras trabajan en Fjöslsmiðjan, o bien conservarán las prestaciones que ya reciben, es decir, subsidio de asistencia social o de desempleo. Los jóvenes de 16 a 18 años que no reciban prestaciones de este tipo tendrán un sueldo equivalente garantizado por la Cruz Roja Islandesa, por lo que todos los participantes percibirán las mismas cantidades, sobre la base de la cuantía del subsidio de desempleo en todo momento. La idea es que, trabajando en Fjöslsmiðjan, cada persona debe ser capaz de descubrir sus aptitudes o intereses, por lo que ese trabajo debe servir de una especie de preparación para nuevos estudios.

Enmiendas a la Ley sobre el derecho al empleo de los extranjeros N° 133/1994

40. En 2000 se introdujeron enmiendas en la Ley sobre el derecho al empleo de los extranjeros, N° 136/1994. La finalidad de las principales enmiendas era aclarar la situación jurídica de artistas ejecutantes en clubes nocturnos en relación con los contratos de empleo, y los cónyuges de nacionales islandeses están ahora inequívocamente exonerados de las condiciones de la ley con respecto a los permisos de empleo. Los derechos de los cónyuges de nacionales islandeses que son ciudadanos de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) se asimilaron a los de los nacionales de Estados miembros del EEE.

41. Se ha previsto presentar al Althing en octubre de 2001 un proyecto de ley sobre los derechos de empleo de los extranjeros, mediante el cual se revisará profundamente la legislación vigente.

Comentarios en respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales del Comité

42. Por lo que se refiere al párrafo 6 de las observaciones finales del Comité, cabe señalar que los nacionales de los países no pertenecientes al EEE y sus cónyuges no gozan en Islandia de los mismos derechos que los nacionales de Estados pertenecientes al EEE en lo que al empleo se refiere. Como queda dicho, el derecho al empleo de los extranjeros en Islandia se rige por la Ley N° 133/1994. El principio general en que se funda la ley es que el empleador debe conseguir un permiso de trabajo para el extranjero antes de que éste llegue a Islandia. Estos permisos se conceden con carácter temporal por un año, a partir del cual son renovables por otros dos años. Transcurridos tres, el nacional extranjero puede solicitar en su propio nombre un permiso indefinido. Dar empleo a un extranjero que no tenga un permiso de trabajo es ilegal, como también es ilegal que los nacionales extranjeros ejerzan un empleo sin el permiso correspondiente.

43. Conforme a la Ley N° 41/2000, se puso en consonancia la situación jurídica de los cónyuges de los nacionales islandeses que no son nacionales de Estados del EEE con la condición jurídica adquirida por los nacionales de los Estados del EEE conforme al Acuerdo

del EEE, es decir, que quedaron expresamente exentos de los requisitos relativos a los permisos de trabajo. Los cónyuges de nacionales de los Estados del EEE que no lo son ellos mismos, están sujetos por otra parte a las mismas normas que otros no nacionales de Estados del EEE en lo que a los permisos de trabajo permanentes se refiere.

Ley de despido colectivo, N° 63/2000

44. En 2000 entró en vigor una nueva Ley de despido colectivo, N° 63/2000, que vino a sustituir a la Ley N° 95/1992. La nueva ley se basa en la Directiva N° 75/129/EEC de la Unión Europea sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros en materia de despidos colectivos. En la ley se trata de los despidos colectivos que llevan a cabo los empleadores por motivos que no guardan relación con ningún empleado y define también el despido colectivo fijando el número mínimo de empleados afectados.

45. La ley impone obligaciones al empleador por lo que se refiere al deber de informar a los delegados sindicales u otros representantes de los empleados y a tratar con ellos si se piensa recurrir al despido colectivo. Además, el empleador debe facilitar al representante de los empleados toda la información relativa a los despidos. Finalmente, el empleador está obligado a informar a la oficina de empleo local que corresponda a la demarcación administrativa en que hayan de producirse los despidos.

Artículo 7

Salario mínimo

46. No se han enmendado las leyes de la remuneración mínima desde que se redactó el segundo informe. Todos los trabajadores de Islandia están amparados por algún convenio colectivo, pues están directamente protegidos como afiliados a un sindicato, o en virtud de las disposiciones de la Ley N° 55/1980 sobre condiciones de trabajo y salarios, etc. Conforme al artículo 1 de la ley es ilegal contratar a un trabajador por remuneración inferior o en condiciones peores a las que tiene derecho como afiliado al correspondiente sindicato. El artículo dice lo siguiente:

"Los salarios y otras condiciones que las principales organizaciones de interlocutores sociales decidan en convenios colectivos serán los salarios y condiciones mínimos, con independencia del sexo, la raza, la nacionalidad o la duración del servicio, para todos los trabajadores asalariados del ramo respectivo en la región abarcada por el convenio. Los acuerdos concertados por trabajadores y empleadores individualmente respecto de una remuneración inferior o peores condiciones de trabajo carecen de toda validez."

Desigualdad de remuneración por un trabajo de igual valor

Discriminación salarial basada en el género

47. Como se indica en el segundo informe periódico de Islandia, en 1995 se llevó a cabo una encuesta sobre la composición de los salarios y las diferencias basadas en el género en ocho empresas privadas e instituciones públicas. Desde entonces no se ha hecho ninguna otra encuesta de este tipo. En la ciudad de Reykjavik, el municipio de Akureyri y la localidad de

Mosfellbær se han procedido a estudios análogos con respecto a sus empleados; en todos ellos se confirma que hay diferencias salariales de entre el 10 y el 16% entre los sexos, cifras que corresponden exclusivamente a diferencias que no pueden explicarse imparcialmente.

48. Conforme a los datos del Instituto Nacional de Economía, los ingresos netos percibidos por las mujeres en razón de su empleo equivalieron en 1999 al 54,2% de los de los hombres. Los ingresos brutos, por otra parte representaron el 58,7% de los de los hombres. Se trata de una cifra media calculada a partir de las declaraciones fiscales.

Cuadro 2
Ingresos medios por expediente

(En miles de ISK)

	1998	1999
Ingresos netos derivados del empleo	1.656	1.805
Total (todos los declarantes)		
Hombres casados	2.840	3.068
Mujeres casadas	1.251	1.391
Parejas, casadas o convivientes	3.780	4.121
Personas solas	1.223	1.335
Hombres, total	2.176	2.353
Mujeres, total	1.151	1.275
Ingresos brutos femeninos, expresados como porcentaje de los masculinos	52,91	54,20
Ingresos brutos		
Total (todos los declarantes)	1.683	1.876
Hombres casados	2.655	2.931
Mujeres casadas	1.298	1.489
Parejas, casadas o convivientes	3.958	4.432
Personas solas	1.305	1.455
Hombres, total	2.147	2.373
Mujeres, total	1.230	1.394
Ingresos brutos femeninos, expresado como porcentaje de los masculinos	57,29	58,74

Fuente: Oficina de Estadística de Islandia.

49. Es preciso, sin embargo tener presente que estas cifras se refieren a la diferencia en ingresos brutos. El motivo de que difieran tanto los salarios brutos de hombres y mujeres puede explicarse en parte porque un gran número de mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que la mayoría de los hombres lo hacen a tiempo completo, y porque además la mayoría de los hombres suelen trabajar más horas pagadas que las mujeres.

50. Para tener una idea más clara de la diferencia real entre los salarios de mujeres y hombres es preciso considerar las diferencias entre la remuneración de ambos en empleos diurnos a

tiempo completo. Por una parte, hay diferencias en razón del género en las diversas categorías de empleo del sector privado y, por otra, entre los funcionarios y las funcionarias.

Cuadro 3

Remuneración por trabajo diurno por ocupaciones, primer trimestre de 2001*

Remuneración mensual, ISK	Total	Hombres	Mujeres	Remuneración femenina expresada como porcentaje de la masculina
Ocupaciones básicas	119.600	126.200	109.600	86,8
Operarios de fábricas y máquinas	134.400	140.000	119.800	85,6
Obreros especializados	126.600	132.900	120.400	90,6
Trabajadores de artes y oficios	206.700	207.400
Empleados de servicios y ventas	146.600	182.700	119.400	65,4
Empleados administrativos	140.200	154.500	137.100	88,7
Técnicos y profesionales afines	226.200	266.000	189.300	71,2
Profesionales	326.700	349.800	291.600	83,4

Fuente: Instituto de Investigación del Mercado Laboral (comunicado de prensa del 12 de junio de 2001).

* Remuneración por horas de trabajo diurno en jornada completa según los contratos laborales, más suplementos, por ejemplo, los pagos por rendimiento y los relacionados con los costos. Los datos se refieren a todos los asalariados.

Las ocupaciones se clasifican conforme a ISTARF 95, versión islandesa de ISCO-88.

51. En este cuadro correspondiente al primer trimestre de 2001 se observa que las mujeres en el sector privado perciben sueldos más bajos que los hombres por el trabajo diurno en las siete categorías de empleo en que están representados ambos sexos. La proporción de las mujeres es más baja en las ocupaciones de servicios y ventas, en que las mujeres perciben el 65,4% de la remuneración masculina, y es más elevada (90,6%) entre los trabajadores especializados.

52. Por lo que se refiere a los sueldos de los funcionarios, de los datos expuestos se desprende que en 1999 las mujeres de la BSRB (Federación de Funcionarios del Estado y Municipales) percibieron algo más del 88,2% de los índices salariales medios de los hombres (sueldos) y el 69,8% de la remuneración total de los hombres. En la BHM (Federación de Empleados Graduados) las mujeres percibían el 94,9% de los índices salariales medios y el 90,7% de la remuneración total de los hombres. Las mujeres también tenían índices salariales proporcionalmente más bajos por horas extraordinarias que los hombres tanto en la BSRB como en la BHM. Lo mismo cabe decir de "otros conceptos" de los trabajadores de la BSRB, mientras que en la BHM las mujeres percibían más por "otros conceptos" que los hombres.

Cuadro 4

La remuneración de las funcionarias expresada como proporción
de la de los funcionarios, 1996-1999

	Sueldo	Horas extraordinarias	Otros conceptos	Remuneración total
	(En porcentaje)			
Funcionarios BSRB ^a				
1996	91,2	46,1	49,5	71,9
1997	91,2	44,7	46,6	70,4
1998	91,6	44,6	48,1	72,2
1999	88,2	42,3	45,6	69,8
BHM ^b				
1996	94,3	62,3	134,8	84,4
1997	94,7	60,3	169,2	84,0
1998	92,9	67,2	169,9	87,1
1999	94,9	70,4	176,4	90,7

Fuente: Cuadro 14.3 de The Statistical Yearbook 2000. Instituto del Mercado Laboral del Sector Público.

^a BSRB Federación de Empleados del Estado y Municipales; empleados del Estado únicamente.

^b Federación de Empleados Graduados.

53. En el informe de Islandia a la Organización Mundial del Trabajo sobre la aplicación del Convenio N° 100 de la OIT (igualdad de remuneración) correspondiente al período de 1° de junio de 1998 al 31 de mayo de 2000 figura más información estadística sobre las diferencias salariales basadas en el género.

El Grupo de Trabajo sobre la evaluación de la tarea

54. El Ministro de Asuntos Sociales nombró un Grupo de Trabajo sobre la evaluación de la tarea el 8 de marzo de 1995. Tras presentar su informe en febrero de 1996, se decidió que el Grupo se encargaría de un proyecto experimental sobre la evaluación de la tarea, que tendría por objeto investigar si esa evaluación podría servir para reducir las diferencias salariales relacionadas con el género. En el proyecto experimental intervinieron dos instituciones o empresas propiedad de la ciudad de Reykjavik, los Servicios de Calefacción del Distrito de Reykjavik y el Departamento de Asuntos Sociales, y una institución del Estados a saber los hospitales estatales. El proyecto culminó con la publicación en mayo de 1999 de un informe del jefe del Grupo, en el que se fijaban directrices de evaluación de la tarea. Cabe mencionar, sin embargo, que no todos los componentes del grupo respaldaron las conclusiones presentadas en el informe.

55. En el informe se resumen las conclusiones que cabe sacar del proyecto experimental. Dado que se hizo a escala restringida, no pueden extraerse de él conclusiones generales en

cuanto al valor práctico y a la aplicación de una evaluación de la tarea no relacionada con el género en el mercado laboral islandés, es decir, en el sector privado. Por otra parte, las conclusiones brindan datos importantes sobre la ideología en que se sustenta la evaluación de la tarea sin tener en cuenta el sexo y los procedimientos que entraña esa evaluación. En cuanto a la evaluación en sí, se intenta definir las premisas de la evaluación de las tareas, para presentarlas sistemáticamente y coordinar los métodos. Una de las principales ventajas de la evaluación de la tarea es que permite comparar cometidos distintos, por lo que es una manera de obviar la subjetividad que entraña la evaluación del contenido y valor del trabajo y puede constituir por ello un instrumento importante en la aplicación de la disposición de la Ley de igualdad de género en la que se estipula que hombres y mujeres deben gozar de las mismas condiciones de empleo por trabajo comparable y de igual valor. El Grupo de Trabajo también subrayó que al hacer la evaluación de la tarea fundándose en las directrices, debe evitarse la discriminación sexual tanto en los sistemas de evaluación de la tarea como en el propio desarrollo de la evaluación. Finalmente se destaca que los sistemas de evaluación de la tarea adoptados en Islandia deben guardar conformidad con los compromisos internacionales contraídos con respecto a la igualdad del género tanto en su concepción como en su aplicación.

Seminario y conferencia sobre discriminación salarial basada en el género en el otoño de 2001 y en la primavera de 2002

56. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno y los interlocutores sociales, en Islandia sigue habiendo discriminación salarial basada en el género. El Ministro de Asuntos Sociales decidió organizar un seminario y una conferencia sobre la discriminación salarial basada en el género en el otoño de 2001 y en la primavera de 2002, en los que se tratará debatir otras facetas y de descubrir aspectos nuevos de la discriminación en este sector que pueden resultar útiles en la campaña para combatirla. Se invitará a representantes de las organizaciones no gubernamentales, intelectuales, artistas e interlocutores sociales a presentar contribuciones.

Ley de licencia de maternidad, paternidad y parental N° 95/2000

57. Uno de los principales objetivos de la Ley de licencia de maternidad, paternidad y parental que se describe más detalladamente en relación con el artículo 10, era reducir la discriminación salarial basada en el género, que se cree debida en parte al disfrute del permiso de maternidad.

Plan de acción cuatrienal sobre medidas para lograr la igualdad de género

58. Como ya se ha dicho, una de las cuatro tareas principales que encierra el plan de acción para lograr la igualdad es la adopción de medidas encaminadas a erradicar la discriminación salarial basada en el género en las instituciones del Estado.

Salud y seguridad en el trabajo

59. La Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo, órgano del Estado dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, tiene a su cargo la inspección de las condiciones de seguridad laboral conforme a la Ley de salud y seguridad en el trabajo N° 46/1980. En los últimos años se han introducido cambios considerables en los reglamentos de salud y seguridad en el trabajo, como puede deducirse de la lista de reglamentos promulgados. Además, de conformidad con las obligaciones impuestas por el artículo 67 del Acuerdo del EEE, el Ministerio de Asuntos

Sociales ha publicado los siguientes reglamentos de aplicación de la mencionada Ley de salud y seguridad en el trabajo, N° 46/1980:

- 1) Reglamento N° 931/2000 sobre medidas de aumento de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo para mujeres embarazadas, que hayan tenido hijos recientemente o que los amamenten;
- 2) Reglamento N° 571/2000 sobre equipos de presión;
- 3) Reglamento N° 570/2000 sobre ascensores y ascensores y montacargas;
- 4) Reglamento N° 238/2001 por el que se enmienda el Reglamento N° 570/2000 sobre ascensores y ascensores y montacargas;
- 5) Reglamento N° 609/1999 sobre grúas y equipos elevadores;
- 6) Reglamento N° 236/2001 por el que se enmienda el Reglamento N° 609/1999 sobre grúas y equipos elevadores;
- 7) Reglamento N° 602/1999 sobre instrucciones de seguridad para el uso de productos químicos en el lugar de trabajo;
- 8) Reglamento N° 154/1999 sobre niveles de contaminación y medidas de reducción de la contaminación en el lugar de trabajo;
- 9) Reglamento N° 140/1998 sobre estaciones de llenado de bombonas de gas;
- 10) Reglamento N° 118/1998 sobre la limitación de las emisiones de ruido de las excavadoras hidráulicas y de cable, las aplanadoras, las palas propulsadas con ruedas u orugas y las excavadoras montadas en tractor;
- 11) Reglamento N° 433/1997 sobre medidas para mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores temporeros;
- 12) Reglamento N° 164/1997 sobre elevadores de automóviles y equipo afín;
- 13) Reglamento N° 431/1997 sobre el empleo de herramientas de trabajo;
- 14) Reglamento N° 554/1996 sobre la protección contra los peligros de los agentes biológicos en el lugar de trabajo;
- 15) Reglamento N° 228/1998 por el que se enmienda el Reglamento N° 554/1996 sobre la protección contra los peligros de los agentes biológicos en el lugar de trabajo;
- 16) Reglamento N° 529/1998 por el que se enmienda del Reglamento N° 554/1996 sobre la protección contra los peligros de los agentes biológicos en el lugar de trabajo;
- 17) Reglamento N° 553/1996 sobre las medidas de seguridad en la minería con perforación;

- 18) Reglamento N° 552/1996 sobre las medidas de seguridad en la minería;
- 19) Reglamento N° 547/1996 sobre el medio de trabajo, la salud y la seguridad en las obras de construcción y en otros trabajos de construcción temporales;
- 20) Reglamento N° 504/1999 por el que se enmienda la sección C del anexo IV del Reglamento N° 547/1996 sobre el medio de trabajo, la salud y la seguridad en las obras de construcción y en otros trabajos de construcción temporales.

Horas de trabajo

Notificación N° 285/1999 de la entrada en vigor de la Directiva 93/104/EC de la UE el 23 de noviembre de 1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

60. Islandia ratificó la Directiva N° 93/104 EC de 23 de noviembre de 1993 el 27 de abril de 1997. Algunas partes de las principales normas de las directivas se han incorporado en los convenios colectivos (véase la Notificación N° 285/1997).

Artículo 8

61. No ha habido cambios fundamentales en las leyes y reglamentos que afectan a los sindicatos desde que se redactó el segundo informe de Islandia; se remite, pues, a ese informe prácticamente en cuanto a todos los detalles relativos a los sindicatos. En la primavera de 2001 el Althing promulgó una enmienda a la Ley de sindicatos y conflictos laborales en lo que atañe a las multas impuestas por la Magistratura del Trabajo. La enmienda se hizo en parte para reflejar el párrafo 1 del artículo 2 del Protocolo N° 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tiene fuerza de ley en Islandia en virtud del artículo 1 de la Ley del Convenio Europeo de Derechos Humanos, N° 62/1994. Con la aprobación de esa enmienda se podrá apelar al Tribunal Supremo contra las multas impuestas por la Magistratura del Trabajo.

Artículo 9

62. En el segundo informe periódico de Islandia se aclaraban los rasgos fundamentales del sistema de seguridad social de Islandia. En los párrafos siguientes se tratará de las novedades que se han producido en este ámbito en los últimos años y se enumeran las principales enmiendas de las leyes. El derecho a la seguridad social, incluido el seguro social, queda garantizado por diversas leyes, en su mayoría auspiciadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Sociales.

Legislación básica sobre seguridad social

63. La Ley de seguridad social, N° 117/1993, modificada ulteriormente es la legislación básica sobre el seguro de enfermedad y el régimen nacional de pensiones. Las prestaciones familiares se rigen por la Ley del impuesto sobre la renta y el patrimonio, N° 75/1981, modificada ulteriormente, la Ley de asistencia social, N° 118/1993 modificada ulteriormente, la Ley de subsidios de vivienda, N° 138/1997 y la Ley de servicios sociales de las administraciones locales, N° 40/1991, modificada ulteriormente. Las prestaciones a los padres se rigen por la Ley de permiso de maternidad, paternidad y N° 95/2000, y las prestaciones de desempleo por la Ley de

seguro de desempleo, N° 12/1997 (véase información más completa sobre el sistema de seguridad social de Islandia en "MISSOC: la protección social en los Estados miembros de la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo, situación al 1° de enero de 2000", Comunidades Europeas 2000).

Seguro de atención de salud y de enfermedad

64. El principio fundamental es un servicio de salud con financiación fiscal para todos los habitantes, basado en la residencia. Las leyes pertinentes son la Ley de servicios de salud pública, N° 97/1990, modificada ulteriormente, y la Ley de seguridad social, N° 117/1993 modificada ulteriormente. Quienes lleven residiendo legalmente en Islandia seis meses quedan cubiertos por el seguro de atención de salud y de enfermedad. El período de seis meses de espera no se aplica a los residentes de otros Estados del Espacio Económico Europeo que residan legalmente en el país.

65. Conforme al régimen del seguro de enfermedad, los tratamientos necesarios en los hospitales son gratuitos. La atención médica durante el embarazo y en la primera infancia también es gratuita. El paciente paga una cantidad fija por cada consulta en un centro de atención primaria de la salud o a un médico de medicina general que oscila entre las 700 ISK y las 1.100 ISK. Los niños y los ancianos pagan menos: 300 ISK. El paciente también paga una cantidad fija por cada consulta a un médico particular, 1.400 ISK, y el 40% del costo del tratamiento que haya dispensado el médico, pero en ningún caso más de 5.000 ISK por consulta.

66. A los pacientes que hayan pagado 12.000 ISK o más a lo largo del año (a partir del 1° de enero) se les expiden certificados que dan derecho a un descuento en el resto del año (hasta el 31 de diciembre). Esa cantidad es menor en el caso de los niños, los ancianos y los discapacitados: de 6.000 ISK los menores de 16 años de la misma familia, y de 3.000 ISK los ancianos y los discapacitados. Los medicamentos se reembolsan clasificados en cuatro categorías, entre el 0 y el 100%, según la gravedad de la enfermedad y la necesidad del medicamento. Se concede un reembolso parcial por determinados tratamientos dentales a los ancianos y a los pensionistas por invalidez y a los menores de 18 años. No se concede ningún reembolso a las personas de 19 a 66 años, salvo que perciban pensiones de invalidez o por defectos congénitos, accidente o enfermedad.

67. Prestaciones en efectivo por enfermedad. El principio fundamental de las prestaciones en efectivo por enfermedad es el de un sistema con financiación fiscal y de prestaciones uniformes para todos los trabajadores en activo que no perciban sueldo durante la enfermedad. La legislación pertinente es la Ley de seguridad social, N° 117/1993, modificada ulteriormente. Los empleados y los trabajadores autónomos, los trabajadores a domicilio y los estudiantes que residan legalmente en Islandia durante seis meses tienen derecho a esas prestaciones. Las dietas percibidas por quienes han debido abandonar un trabajo remunerado de jornada completa son de 734 ISK. La prestación diaria a quienes han tenido que abandonar un trabajo de jornada parcial pero de media jornada como mínimo es de 367 ISK.

68. Prestación de rehabilitación. Se puede pagar hasta 12 meses una vez que se deja de percibir la prestación en metálico por enfermedad o hasta que pueda determinarse el grado de discapacidad.

Seguro de accidentes en el trabajo

69. Conforme a la Ley de seguridad social, N° 117/1993, el seguro de accidente en el trabajo abarca a todos los empleados. Los trabajadores autónomos también están asegurados a menos que opten voluntariamente por la exención. Las prestaciones se pagan cuando el asegurado sufre lesiones en el trabajo o en el camino de ida o vuelta. El seguro también cubre la enfermedad profesional. Las prestaciones del seguro de accidentes en el trabajo son más elevadas que las del seguro de enfermedad y las pensiones en general.

70. Las prestaciones son las siguientes: i) prestaciones en especie; ii) dietas en efectivo por lesiones de 900 ISK y, además, 193 ISK por cada hijo a cargo menor de 18 años; iii) una cantidad fija si el nivel de invalidez se fija concluyentemente por debajo del 50%; iv) pensión de invalidez por incapacidad permanente. Por una incapacidad del 75% o más corresponde una pensión básica completa. Se paga a razón de la mitad de la pensión por la incapacidad del 50% o más, cantidad que aumenta en un 2% por cada grado de incapacidad adicional hasta el 75%.

Régimen nacional de pensiones

71. Hay tres regímenes de pensiones en Islandia: un régimen nacional proporcional a las aportaciones, un régimen profesional plenamente financiado y un régimen voluntario. El régimen nacional de pensiones abarca la pensión de vejez, la de invalidez y la de supervivientes que adopta la forma de pensión por hijos. La legislación pertinente es la Ley de seguridad social, N° 117/1993, modificada ulteriormente. Los mayores de 67 años que hayan residido en Islandia por lo menos tres años entre los 16 y los 67 años tienen derecho a percibir la pensión de vejez. Se pagará pensión anual completa a quienes hayan residido en Islandia como mínimo 40 años entre los 16 y los 66 años inclusive. Si los períodos son más breves la pensión se reduce en proporción. Los residentes en Islandia tienen derecho a pensión de invalidez si tienen entre 16 y 67 años y han residido en Islandia por lo menos los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud y su incapacidad permanente se evalúa en el 75% como resultado de una enfermedad o invalidez reconocida en medicina. La pensión por hijos se paga a los menores de 18 años al fallecimiento de cualquiera de los progenitores o cuando uno de ellos sea perceptor de la pensión de invalidez.

72. El suplemento de pensión complementa la pensión de vejez o invalidez de quienes sólo perciben la pensión básica o poco más. También se paga un suplemento de pensión extraordinario a los pensionistas solos que únicamente perciben la pensión de la seguridad social o poco más. Asimismo se puede pagar un complemento, previa justificación de falta de medios, a una persona que perciba un suplemento de pensión completa y viva sola sin apoyo económico ajeno.

73. En su sentencia de 19 de diciembre de 2000, el Tribunal Supremo de Islandia interpretó los artículos 76 y 65 de la Constitución de Islandia referidos al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según se dice en los párrafos 3 a 5 del presente informe, en el artículo 76 de la Constitución se dispone el derecho a asistencia, entre otras cosas, por causa de enfermedad, invalidez, desempleo y vejez, y el artículo 65 sobre la igualdad de derechos es comparable al artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La causa se refería a la reducción del suplemento de pensión debido a los ingresos del cónyuge, de conformidad con la

Ley de seguridad social, N° 117/1993. El Tribunal Supremo determinó que la reducción, según se estipulaba en la Ley de seguridad social era excesiva y no garantizaba los derechos mínimos consagrados en los artículos 76 y 65 de la Constitución, leídos junto con los artículos mencionados de los Pactos Internacionales. En la sección I.B del informe figura información más detallada sobre esta sentencia.

Régimen de pensiones suplementarias

74. El régimen de pensiones suplementarias es un régimen plenamente financiado que se rige por la Ley de pensiones, N° 129/1997, y que administran fondos individuales de pensiones. Los empleados y trabajadores autónomos tienen la obligación legal de contribuir a sus respectivos fondos de pensiones profesionales. La contribución a los fondos no debe ser inferior al 10% de sueldo bruto, pagando el empleador el 6% y el empleado el 4%. Los fondos de pensiones pagan pensiones de vejez (la edad de jubilación es generalmente de 65 a 70 años) y pensiones de invalidez y a los cónyuges y/o hijos supervivientes.

Prestaciones familiares

75. Las prestaciones por hijos, de conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta y el patrimonio, N° 75/1981, son las siguientes: i) prestación por hijos por cada menor de 7 años. El importe anual es de 33.470 ISK y depende del nivel de ingresos imposables de los padres; ii) prestaciones por los hijos menores de 16 años que se reducen según ciertos baremos cuando los ingresos imposables de los padres casados o convivientes superen 1.290.216 ISK y cuando los ingresos imposables de los progenitores solos rebasen 645.109 ISK. El importe pagado a los progenitores casados o convivientes por el primer hijo asciende a 113.622 ISK y por el segundo hijo y siguientes a 135.247 ISK; el suplemento por los hijos de 1 a 7 años es de 31.703 ISK. En el caso de los progenitores solos el importe por el primer hijo es de 189.244 ISK y por el segundo hijo y siguientes de 194.125 ISK.

76. Conforme a la Ley de asistencia social, N° 118/1993, podrá pagarse a los progenitores solos un subsidio por el cuidado de hijos menores de 18 años. Ese importe dejará de abonarse un año después de que el progenitor contraiga matrimonio o se inscriba en el registro nacional como conviviente.

77. Podrá pagarse el subsidio de cuidado en el hogar de conformidad con la Ley de asistencia social, N° 118/1993 en forma de subsidio o de prestación mensual por el cuidado de los hijos a los progenitores u otros que se ocupen de niños discapacitados o enfermos crónicos en el hogar o en un hospital.

78. De conformidad con la Ley de asistencia social N° 118/1993 podrá pagarse una pensión por hijos en concepto de educación a las personas de 18 a 20 años que estudien o sigan formación profesional si uno o ambos progenitores son pensionistas o han fallecido.

79. El subsidio por fallecimiento de conformidad con la Ley de asistencia social, N° 118/1993, se paga a quienes pierdan al cónyuge antes de alcanzar los 67 años y consiste en una ayuda mensual durante 6 meses (18 meses si se está criando a uno o más hijos menores de 18 años) tras la muerte del cónyuge.

Seguro de desempleo

80. La situación económica de Islandia ha sido muy estable en los últimos años con un desempleo mínimo. En 1997, el 4,3% de la fuerza laboral estimada carecía de empleo. En 1998 la cifra era del 2,8%, en 1999 del 1,9% y en 2000 del 1,3%. A lo largo de ese período se han introducido importantes cambios en la estructura del seguro de desempleo. El 1º de julio de 1997 entraron en vigor nuevas leyes: Ley sobre el seguro de desempleo, N° 12/1997, Ley del fondo de seguros de los trabajadores autónomos, N° 46/1997, y Ley sobre medidas en el mercado laboral, N° 13/1997. El propósito de esas leyes, como dijo el Ministro de Asuntos Sociales en el Althing, era mejorar la situación del mercado de trabajo y el seguro de desempleo en Islandia. Por la Ley N° 47/1998, se modificó la Ley N° 12/1997 a fin de mejorar la situación de los desempleados, tal y como constaba en las notas aclaratorias del proyecto de ley.

Ley de seguro de desempleo N° 12/1997

81. La principal novedad de la Ley de seguro de desempleo, N° 12/1997, con respecto a las leyes anteriores es que para tener derecho a percibir la prestación de desempleo, debe haberse trabajado durante un período de al menos 10 semanas en los 12 meses anteriores (contando jornadas de trabajo completas) en un empleo cubierto por el seguro, o por un período proporcionalmente más largo si se trata de trabajo a tiempo parcial. Conforme a la misma ley, el período máximo de percepción del subsidio de desempleo es de cinco años. Finalmente, por la nueva ley se crea un Tribunal de Prestaciones de Desempleo Especial, competente para revisar las decisiones adoptadas por la junta del Fondo.

82. Las personas con derecho a prestaciones y que se matriculen en un curso o se vean obligadas a dejar de trabajar por problemas domésticos conservan su derecho adquirido a las prestaciones durante un período de 24 meses como máximo. Lo mismo sucede con una persona que se retira del mercado laboral a fin de disfrutar de la licencia por maternidad o paternidad, y con personas privadas de libertad por decisión de un tribunal.

83. Con arreglo al artículo 7 de la ley, al 1º de enero de 2001, la cuantía máxima de las prestaciones de desempleo era de 3.137 ISK por día. La cuantía mínima de las prestaciones era de la cuarta parte de esta cantidad. Esto significa que la cuantía máxima de las prestaciones de desempleo, al 1º de enero de 2001, era de 67.979 ISK por mes. La cantidad máxima se revisa todos los años en ocasión de la aprobación de los presupuestos del Estado, teniendo en cuenta las tendencias de los sueldos, los precios y la economía (véase el artículo 7). El mismo artículo indica también que, además de las prestaciones que se establecen con arreglo al párrafo 1, los que tienen obligación legal de mantener a hijos menores de 18 años, recibirán un 4% de la cuantía diaria de la manutención correspondiente a cada hijo. Las prestaciones de desempleo pagadas a una persona que recibe una pensión de vejez o invalidez, o un subsidio por discapacidad del Instituto de la Seguridad Social, se reducen en la cantidad que exceda del límite no imponible para el seguro de ingresos que se haya determinado en su día. Lo mismo sucede con las pensiones de vejez y de invalidez pagadas con los fondos de pensiones y los ingresos del trabajo a tiempo parcial. En cuanto a la cuantía de las prestaciones, véase el Anuario Estadístico de Islandia 2000, que se adjunta a este informe*.

* Se puede consultar en los archivos de la Secretaría.

Reglamento sobre las prestaciones de desempleo a los extranjeros con permiso de trabajo provisional

84. Con arreglo al Reglamento N° 43/2001, se pagarán prestaciones de desempleo a los extranjeros con permiso de trabajo provisional que pierdan su empleo a causa de una huelga iniciada por otros grupos profesionales, siempre que el patrono haya pagado las correspondientes primas de seguro de desempleo. En lo que respecta a otras cuestiones, las decisiones sobre el derecho a percibir prestaciones se rigen por la Ley de seguro de desempleo, N° 12/1997. Las condiciones para tener derecho a las prestaciones son que el solicitante asista a un curso impartido por la bolsa de trabajo local que puede resultar valioso en cuanto formación profesional y que vuelva a trabajar para el patrono tan pronto como se reanude el trabajo.

Fondo de seguro para los trabajadores autónomos

85. El Reglamento N° 389/1993, que entró en vigor el 1° de octubre de 1993, reconoció por primera vez a los trabajadores autónomos el derecho a percibir prestaciones de desempleo. El Reglamento les dio por primera vez el derecho a prestaciones ordinarias por su trabajo como trabajadores autónomos.

86. La Ley N° 46/1997 introdujo una modificación por la que se establece el Fondo de Seguro de los Trabajadores Autónomos que entró en vigor el 1° de julio de 1997. El Fondo consta de tres sectores: agricultores, conductores de vehículos de carga, y propietarios de embarcaciones pequeñas. Se prevé incorporar a la ley nuevas ocupaciones, pero aún no se ha hecho.

87. La Junta del Fondo es designada por el Ministro de Asuntos Sociales según los candidatos propuestos por las organizaciones de los miembros del Fondo, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Sociales. La Junta del Fondo nombra luego a un comité de asignaciones compuesto de cinco personas, que determina la cuantía de las prestaciones y las condiciones que impiden percibir prestaciones. En otras cuestiones, la Ley N° 46/1997 se basa en la Ley de prestaciones de desempleo N° 12/1997, y los pagos de prestaciones se realizan en todo momento mediante el sistema de pagos del Fondo de prestaciones de desempleo; además el Fondo se ocupa de la gestión diaria de las finanzas del Fondo de los trabajadores autónomos. Las reclamaciones se tratan conforme a la normativa que rige en los casos de prestaciones ordinarias de desempleo, y las decisiones del comité de asignaciones pueden remitirse al Tribunal de prestaciones de desempleo.

88. Para tener derecho al pago de las prestaciones, el solicitante debe haber dejado de trabajar, no haber empezado a trabajar por cuenta ajena y demostrar que busca trabajo y está en condiciones de aceptar ofertas de empleo. También se da por sentado que los solicitantes deben estar dispuestos a aceptar un trabajo a tiempo completo, si bien hay excepciones, por ejemplo, si el solicitante no está en condiciones de trabajar a tiempo completo o si estaba trabajando a jornada parcial antes de perder el trabajo.

Ayudas económicas

89. La ayuda económica se describió pormenorizadamente en el segundo informe de Islandia al que se remite en lo que respecta a los temas más importantes. A continuación se describe la evolución en esta esfera.

Modificaciones a la Ley de Servicios Sociales N° 34/1997 de las administraciones locales

90. La Ley de servicios sociales N° 34/1997 introdujo modificaciones en la correspondiente Ley de las administraciones locales. Una de las modificaciones consiste en que las autoridades locales deben pagar la ayuda económica con carácter retroactivo.

Subsidio de alquiler

91. En la Ley N° 138/1997, que entró en vigor el 1° de enero de 1998, se prevé un subsidio de alquiler para las personas que alquilan un alojamiento privado. El subsidio lo paga la correspondiente administración local. En las condiciones sobre el artículo 11, se explica esta prestación más detalladamente.

92. El subsidio de alquiler se considera un ingreso y se asocia al patrimonio; así pues, constituye una modalidad importante de apoyo social para los diversos grupos de población con pocos ingresos, como los que tienen los ingresos más bajos, los discapacitados y los estudiantes.

93. La Ley N° 52/2001, por la que se modifica la Ley N° 138/1997, amplió el acceso al subsidio de alquiler. El principal cambio consiste en que garantiza el derecho al subsidio de alquiler a los que viven en alojamientos comunales, por ejemplo, los estudiantes que viven en residencias estudiantiles y los discapacitados que viven en hogares comunales.

Comentarios concretos relativos a los párrafos 16, 21 y 22 de las observaciones finales del Comité sobre la pobreza en Islandia

94. De conformidad con un estudio de la pobreza en Islandia realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Islandia en colaboración con el Consejo Nórdico de Ministros de 1998, aproximadamente el 6,8% de los islandeses de más de 20 años de edad tenían un nivel de vida que se situaba por debajo del umbral de pobreza. Esto representa una disminución con respecto a 1998, en que un estudio comparable reveló una cifra del 7,8%.

95. En el estudio, pobre es la persona que percibe menos del 50% de los ingresos medios equivalentes de una familia. Los ingresos familiares se dividen luego entre los miembros de la familia conforme a la información sobre la composición de la familia basada en una fórmula elaborada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (la anterior escala de equivalencia de la OCDE), teniendo en cuenta el supuesto de que el hecho de vivir juntos constituye una ventaja económica que da lugar a un mejor nivel de vida para cada miembro de la familia. Esta definición de pobreza tiene algunas limitaciones que deben tenerse presentes al evaluar los resultados. Se basa en la idea de que la pobreza es algo relativo que se puede expresar según las condiciones generales de la sociedad, en lugar de definirse en términos absolutos basados en premisas fijas. Los que están por debajo del umbral de pobreza son en realidad los que pertenecen a los grupos de ingresos más bajos. La pobreza, según esta definición, supone por lo tanto una capacidad limitada de participación en la sociedad. Definida de esta forma, la pobreza no implica necesariamente que la persona en cuestión carezca de los elementos básicos, como la alimentación y la ropa, o la vivienda.

96. En Islandia, toda persona tiene garantizados los medios básicos de supervivencia mediante un sistema de seguridad social amplio que ya se describió en relación con el artículo 9 del Pacto. Los ingresos disponibles son altos, como lo muestra que el promedio de ingresos disponibles del 10% de las parejas de hecho con ingresos mínimos era, en 1999, según las cifras de la Oficina de Estadística de Islandia, de 1.322.000 ISK.

97. De conformidad con el estudio, la pobreza parece relacionada con determinados grupos sociales. Los niveles más altos de pobreza se detectaron entre los estudiantes, los desempleados, las madres solteras y las personas que no tenían trabajo remunerado. Los estudiantes tienen derecho a préstamos para costearse los estudios. Además, por regla general, la pobreza de los estudiantes dura poco tiempo, ya que sus estudios los preparan para trabajos con sueldos medios o superiores a la media. En los últimos años ha habido una reducción considerable del desempleo, que pasó del 4,3% en 1997 al 1,3% en 2000 y por consiguiente puede suponerse que la pobreza de este grupo se ha reducido en consecuencia.

98. Si se comparan las cifras de 1997/98 con las de 1988 se observa que la pobreza se ha reducido en todos los grupos de edad, y la mayor disminución corresponde al grupo de los mayores, de un 12,4 a un 4,3%. El motivo es que los fondos de pensiones de los sectores laborales pagan constantemente a sus miembros mayores prestaciones que antes.

Cuadro 5

Incidencia de la pobreza en Islandia y otros países occidentales; ingresos disponibles por grupo de edad

	Todos los mayores de 20 años	De 25 a 59 años	A partir de los 65/67 años
	(En porcentaje)		
Islandia 1988	7,8	6,0	12,4
Islandia 1997/98	6,8	5,5	4,3
Suecia	4,9	2,6	1,4
Noruega	3,5	2,9	2,6
Finlandia	4,1	1,6	3,9
Dinamarca	5,3	-	-
Países Bajos	5,8	3,5	0,2
Francia	8,5	8,0	1,9
Canadá	10,9	10,9	4,9
Australia	9,1	9,3	5,2
Alemania	5,8	5,3	5,3
Gran Bretaña	13,2	11,0	9,2
Suiza	7,4	5,8	11,9
Estados Unidos de América	17,9	17,8	17,5
Promedio (no ponderado)	8,0	7,1	6,4

Fuente: Stefán Ólafsson, Háskólaútgáfan 1999, Íslenska leiðin, almannatryggingar og velferð í fjölþjóðlegum samanburði. (The Icelandic Way. Social Security and Welfare in Comparison

with Other Countries). (El modelo islandés. Comparación de la seguridad y las prestaciones sociales islandesas y de otros países.)

Nota: Este cuadro se basa en el Luxembourg Income Study (LIS) (Estudio de ingresos de Luxemburgo), realizado en 1985-1990 para los datos del extranjero. Las estadísticas islandesas se obtuvieron a partir de datos de estudios del nivel de vida realizados por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Islandia en 1988, y las cifras de 1997/98 proceden de un estudio de cinco países realizado por el Instituto.

99. Cuando se comparan los datos de la pobreza de los otros países occidentales, según se definen en el estudio (véase cuadro), se descubre que la incidencia de la pobreza en Islandia es inferior a la media de los otros países de la OCDE que se incluyen en el estudio. No obstante, hay más pobreza en Islandia que en los demás países nórdicos, pero considerablemente menos que en los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Canadá y Australia.

100. Se han introducido muchas modificaciones en la legislación de Islandia que han tenido una repercusión directa en la pobreza. Al mismo tiempo, la mejora de la economía, que da lugar a una gestión económica eficaz, ha tenido como consecuencia un mejor nivel de vida y un aumento del poder adquisitivo, por lo que la pobreza disminuye. Entre las modificaciones legislativas cabe citar la reestructuración del sistema de subsidios de desempleo, el establecimiento de un fondo de seguro de desempleo para los trabajadores autónomos, la nueva Ley de igualdad de género, las medidas adoptadas contra la discriminación en los sueldos por motivos de género, las modificaciones relativas a la disminución del subsidio de incapacidad por los ingresos del cónyuge, etc.

101. En el informe de Islandia del año 2000 relativo al Convenio N° 122 de la OIT figura más información sobre las pautas económicas.

Artículo 10

102. Desde la presentación del segundo informe de Islandia se han producido importantes cambios en el ámbito de los derechos de los padres y la protección de la infancia y se han adoptado medidas explícitas para mejorar la situación de la familia y garantizarle la protección necesaria para que desempeñe su papel de pilar básico de la sociedad.

Protección de la familia

Resolución parlamentaria sobre la formulación de una política oficial de la familia y medidas destinadas a mejorar la situación de la familia

103. En 1997, el Althing aprobó una resolución parlamentaria sobre la elaboración de una política oficial de la familia y las medidas destinadas a mejorar la situación de la familia. Las premisas principales de esta política son que el funcionamiento correcto de la familia debe basarse en la igualdad de hombres y mujeres, que la familia ha de ser el lugar donde se forman y mantienen los vínculos emocionales y que la vida de familia ha de dar a las personas (en especial a los niños) la seguridad y la oportunidad de desarrollar su potencial al máximo.

104. Los objetivos principales de la política familiar son los siguientes: crear las condiciones en las que se pueda lograr un equilibrio entre la vida familiar y laboral; destacar la repartición igualitaria de las obligaciones de los progenitores en el ámbito del hogar y el cuidado y crianza de los hijos; lograr que las instituciones sociales, en especial las escuelas y guarderías, colaboren con la familia; garantizar la seguridad económica esencial de la familia y el derecho a la seguridad de la vivienda; lograr que los servicios de salud tengan en cuenta las necesidades de la familia en su conjunto y que garanticen el sustento familiar a fin de cuidar de las personas de edad y de los enfermos; permitir que las personas mayores participen en la sociedad durante el mayor tiempo posible; prestar apoyo a las familias de los discapacitados, enfermos crónicos y otros grupos conforme a sus necesidades y respetar los derechos fundamentales de la población en lo que respecta a fundar una familia, tener un hogar y desempeñar un papel activo en la sociedad; ofrecer a las familias de los inmigrantes el apoyo necesario para arraigarse definitivamente en la sociedad islandesa y luchar contra la discriminación por motivos de raza, religión, cultura u orientación sexual; intensificar las medidas contra la violencia, tanto dentro como fuera de la familia, y proteger a la familia y darle apoyo contra el alcoholismo y el consumo de drogas.

105. Tras la publicación de la política de la familia, se creó un Consejo de Familia. Su función es apoyar y proteger a la familia. Una de las labores del Consejo consiste en asesorar al Gobierno sobre las cuestiones de la familia, hacer propuestas de campañas de acción relativas a la familia y apoyar la investigación sobre la situación y las circunstancias de la familia islandesa.

Ley N° 27/2000 de prohibición de despido a causa de responsabilidades familiares

106. La Ley de prohibición de despido a causa de responsabilidades familiares N° 27/2000 entró en vigor en el verano de 2000. Según la ley, no se puede despedir a una persona únicamente por sus circunstancias familiares. En este contexto se entiende por "responsabilidades familiares" la responsabilidad del trabajador en relación con sus hijos, cónyuge o familiares cercanos que vivan en el hogar y que necesiten realmente de su cuidado o tutela, por ejemplo, por causa de enfermedad o discapacidad.

107. El trabajador debe reunir tres condiciones principales para demostrar la existencia de las responsabilidades familiares. En primer lugar, debe tener la responsabilidad de los propios hijos, cónyuge o familiares cercanos. En segundo lugar, estas personas deben vivir en la propia casa del trabajador, y en tercer lugar, la persona o personas de que se trate deben necesitar de sus cuidados o tutela por causa, por ejemplo, de enfermedad, discapacidad o circunstancias equiparables. Para considerar que el trabajador asume la responsabilidad respecto de las personas pertinentes en el sentido de la ley deben reunirse las tres condiciones; por lo tanto, esta disposición se basa en una interpretación estricta del término.

Convenio N° 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de 1981

108. Islandia ha ratificado el Convenio N° 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, de 1981. La Ley N° 27/2000 que se acaba de mencionar relativa la prohibición de despido a causa de responsabilidades familiares se basa fundamentalmente en el Convenio de la OIT.

Ley N° 34/1997 por la que se modifica la Ley de servicios sociales de las administraciones locales

109. La Ley N° 34/1997 introdujo modificaciones en la Ley de servicios sociales de las administraciones locales. Se introdujeron nuevas disposiciones sobre la estructura de los comités de asuntos sociales cuando también asumen la responsabilidad del bienestar de los niños y obliga asimismo a las autoridades locales a ofrecer orientación social a los habitantes de su jurisdicción. Además, la ley obliga a los comités de asuntos sociales a contratar personal con las calificaciones adecuadas para ofrecer orientación en cuestiones sociales.

Licencia por maternidad

Ley de licencia de maternidad, paternidad y parental, N° 95/2000

110. Como ya se ha indicado, la nueva Ley de licencia de maternidad, paternidad y parental, N° 95/2000, fue aprobada en 2000 y entrará plenamente en vigor el 1° de enero de 2003. Se trata de una reforma fundamental del sistema hasta ahora vigente. El principal objetivo de esta ley es crear las condiciones para que hombres y mujeres puedan participar por igual en el empleo remunerado y otros cometidos fuera del hogar, y garantizar el tiempo dedicado a los hijos por ambos progenitores. Por otro lado, la ley protege a los trabajadores del despido por tomar licencia de maternidad, paternidad o parental. En la ley también hay disposiciones sobre los derechos de los progenitores que no están en el mercado de trabajo, o que son estudiantes, a percibir ayuda económica por el nacimiento de un hijo.

111. Las características principales del nuevo sistema, tras las enmiendas, son que las mujeres y los hombres tienen el mismo derecho, no transferible, de tomar licencia por el nacimiento de sus hijos (licencia por maternidad y paternidad), independientemente de que trabajen en el sector privado o público. Se garantiza a los progenitores un derecho independiente de tres meses de licencia para cada uno y también tres meses que pueden distribuirse entre los dos como lo deseen. Se ha creado un fondo especial para financiar esta licencia; los pagos que realiza el fondo ascienden al 80% del sueldo bruto medio o de la remuneración calculada sobre el período de 12 meses seguidos hasta dos meses antes del primer día de la licencia. La ley prevé una gran flexibilidad en la aplicación de esta licencia: los padres pueden tomar la licencia ininterrumpidamente o en varios períodos más breves, y trabajando a tiempo parcial, o ambas cosas, durante un período de hasta 18 meses.

112. La licencia de maternidad y paternidad que se tome con arreglo a la ley se calcula como tiempo de trabajo a los efectos del cálculo de los derechos laborales, por ejemplo, el derecho a vacaciones, los derechos de antigüedad, la licencia por enfermedad, los plazos de notificación de cese en el servicio, etc. Si el niño o la madre se enferman después del nacimiento, es posible prolongar el derecho conjunto a licencia de los padres. La nueva ley garantiza también a las mujeres embarazadas y a las que han dado a luz recientemente una mayor protección de la salud y seguridad en el trabajo, y a las mujeres embarazadas se les garantiza el apoyo del Fondo de licencias de maternidad y paternidad si no están en condiciones de seguir trabajando a causa del embarazo.

113. Además de los derechos que se acaban de mencionar, todos los progenitores tienen ahora derecho a 13 semanas de licencia (licencia parental) a fin de cuidar de sus hijos. Este derecho se

puede transferir y los progenitores pueden tomar esta licencia en un solo período o en períodos más breves, o reduciendo las horas de trabajo.

114. La relación laboral entre el trabajador y el empleador no se modifica durante la licencia por maternidad, paternidad y parental, y los trabajadores tienen derecho a reintegrarse al finalizar el período. De no ser posible, tienen derecho a puestos equiparables en la empresa, con arreglo al contrato de trabajo. Los trabajadores también están protegidos por la Ley contra los despidos por tomar la licencia de maternidad, paternidad o parental y lo mismo rige para las medidas de despido que afecten a las mujeres embarazadas y a las que acaban de dar a luz.

Los niños, la protección de la infancia y el trabajo infantil

115. En lo que respecta a las cuestiones relativas a la infancia, se remite en su mayor parte al segundo informe periódico de Islandia. A continuación se mencionan las únicas modificaciones realizadas al sistema que se describía en detalle en ese informe.

Definición del niño

116. La Ley de capacidad jurídica, N° 71/1997, elevó de 16 a 18 años la edad en que las personas tienen capacidad jurídica para gestionar sus asuntos parentales. El motivo es que debe seguirse la definición de la Convención sobre los derechos del Niño, es decir toda persona menor de 18 años. Además el régimen islandés se consideraba distinto del vigente en los países vecinos. En una reunión celebrada a principios de 1996 entre el Comité sobre los Derechos del Niño y representantes del Gobierno de Islandia, el Comité recomendó que se revisara la Ley de capacidad jurídica. El aumento del límite de edad también se basa en la transformación de las condiciones sociales y la necesidad de educación de los jóvenes. Por otra parte, cabe señalar una discrepancia entre las obligaciones de los padres como tutores y la obligación de apoyo; también se reconoció la necesidad de un aumento de este límite de edad en relación con la protección a la infancia, ya que los comités de protección a la infancia no podían intervenir cuando se trataba de personas mayores de 16 años, salvo que tuvieran la aprobación de los interesados, lo que significaba que era difícil obtener la continuidad necesaria en el apoyo y el tratamiento. La ley entró en vigor el 1° de enero de 1998; no obstante, las personas que hubieran cumplido los 16 años de edad antes de la vigencia de la ley seguían estando habilitadas para resolver por sí mismas.

117. La Ley de capacidad jurídica elevaba a los 18 años la edad en que una persona puede decidir sobre sus asuntos. La gestión de los asuntos de una persona que tiene menos de esta edad se encomienda a los padres o a los que ejercen la patria potestad. Esto es lo que se conoce como tutela y se rige por las disposiciones de la Ley de la infancia y la Ley de protección de la infancia.

118. En junio de 1997, el Ministro de Justicia creó un comité para examinar las leyes que hubiera que modificar al aumentar el límite de edad mencionado. El Comité se componía de representantes de seis ministerios del Gobierno. En noviembre de 1997, el Comité presentó su informe y propuestas al Ministro. Posteriormente, se han introducido modificaciones a los límites de edad que figuraban en diversas leyes, como la Ley de matrimonio, la Ley de nombres de personas y la Ley de domicilio legal.

Enmiendas a la Ley de protección de los niños y los adolescentes, N° 58/1992

119. Tras la aprobación de la nueva Ley de mayoría de edad, N° 71/1997, también se introdujeron enmiendas en la Ley de protección de los niños y los adolescentes, N° 58/1992. Se eliminó la distinción entre "niños" (de 0 a 16 años) y "adolescentes" (de 16 a 18 años) y se modificó la definición de "niño" que se armonizó con la utilizada en la Ley de mayoría de edad y las convenciones internacionales. Según la ley, niño es toda persona menor de 18 años de edad, y después de la enmienda, la ley se aplica a todos los menores de 18 años.

120. También se consideró necesario, a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley de mayoría de edad, introducir disposiciones más explícitas sobre los niños cuya conducta supone una amenaza para su salud y su desarrollo, especialmente en el grupo de edad de 16 a 18 años. Antes de la enmienda, sólo se podía internar a un niño en una institución durante un plazo breve o hasta cuatro semanas seguidas a efectos de investigación. Sin embargo, siempre predominó la opinión de que, como parte de la patria potestad, los padres estaban facultados para consentir en la internación por períodos más prolongados, puesto que cuatro semanas, en la mayoría de los casos, son insuficientes para administrar el tratamiento necesario. Tras la introducción de esta enmienda, por lo tanto, los padres de jóvenes de 16 a 18 años de edad están facultados para dar su asentimiento a períodos más largos de internación.

121. También se consideró necesario, como parte de la enmienda, conceder a los niños más posibilidades de expresar su opinión en los asuntos que les afectan. Entre otras cosas, se afirma que uno de los objetivos de la ley es que los menores gocen de sus derechos en función de la edad y madurez del niño; esta redacción se conforma a los artículos 5 y 12 de la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Por este motivo se ha introducido una nueva disposición, el artículo 43 a), en la parte de la ley que trata del procedimiento, que garantiza al niño el derecho a expresar su parecer en cuestiones que le afectan y que se tendrán debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, en las cuestiones a las que se aplica la ley. También se prevé que los niños mayores de 12 años tengan oportunidad de expresar sus opiniones sobre una cuestión y, por último, se prevé que el comité de protección de la infancia tome la iniciativa del nombramiento de un portavoz del niño en los casos en que las circunstancias exijan que este representante defienda sus intereses.

122. El Ministro de Asuntos Sociales también nombró un comité encargado de la revisión completa de la ley. El Comité ha concluido su labor y actualmente el Althing está estudiando el proyecto de una nueva ley de protección de la infancia.

Instituciones y residencias para el tratamiento de los niños

123. Se ha encomendado a un organismo especial oficial, la Dirección de Protección de la Infancia (Barnaverndarstofa) la coordinación y organización del trabajo en el ámbito de la protección del niño. Este organismo se encarga de vigilar las instituciones de protección de la infancia y los hogares del Estado o que cuentan con su apoyo. Entre sus obligaciones figura la supervisión profesional y financiera del trabajo de estos hogares. También está facultado para fijar las condiciones relativas a su especialización y tomar la iniciativa sobre el establecimiento de nuevos hogares. En los últimos años se ha desarrollado una importante labor en el establecimiento de servicios de tratamiento de niños y jóvenes, cuyo fundamento fue la Dirección de Protección de la Infancia, creada en 1995.

124. El tratamiento dispensado por la Dirección a los menores es de dos tipos. Por un lado, la labor del Stuðlar, el Centro del Estado para el tratamiento de adolescentes, que abarca medidas de diagnóstico e internación a corto plazo en casos de urgencia, y por otro, los hogares para tratamiento de larga duración, que son privados y se rigen por contratos de servicio con la Dirección de Protección de la Infancia. La norma general es que los adolescentes pasen primero por el Stuðlar para establecer el diagnóstico, y a continuación se les remita para un tratamiento de larga duración, en caso necesario. El número de hogares privados que trabajan para la Dirección ha aumentado; en la actualidad hay ocho, todos ellos situados fuera de Reykjavik. Se especializan en atender a las necesidades de distintos tipos de personas; algunos, por ejemplo, están especialmente preparados para tratar con niños o adolescentes con diversos trastornos de comportamiento, tendencias delictivas y circunstancias familiares difíciles, mientras que otros están mejor capacitados para tratar a los jóvenes drogadictos y sus problemas. La Dirección de Protección de la Infancia asigna las plazas en los hogares de tratamiento.

125. Los protegidos más jóvenes de la Dirección de Protección de la Infancia, los niños de 6 a 12 años, son internados en el hogar de tratamiento de la institución Barnaheill (Save the Children de Islandia) en los casos de niños con circunstancias familiares difíciles, problemas en la escuela o trastornos de comportamiento. El hogar es privado y funciona con contratos de servicio con la Dirección. Los niños en edad de cumplir la escolaridad obligatoria y son internados en estos hogares tienen garantizada una plaza en la escuela correspondiente de las zonas de la administración local. A los mayores se les garantiza el acceso a la enseñanza secundaria fuera del sistema escolar obligatorio.

Reglamento N° 401/1998 sobre hogares y otras instituciones para niños

126. Este reglamento fue dictado en el marco de la Ley de protección de la infancia N° 58/1992 y se aplica a los hogares e instituciones para la infancia dirigidos por particulares y organizaciones no gubernamentales y que ofrecen alojamiento día y noche para seis o más niños menores de 18 años y educación, atención o tratamiento de urgencia. El ámbito de este Reglamento se extiende a los hogares de tratamiento, hogares de vacaciones y centros de urgencia. El reglamento abarca la concesión de autorizaciones para estas operaciones, permisos y requisitos relativos al alojamiento, la edad de los niños, el equipo necesario y la responsabilidad de la parte operativa. También se prevé la supervisión de los hogares por los comités de protección de la infancia y la Dirección de Protección de la Infancia.

Reglamento N° 562/2000 sobre las familias que aceptan niños por un período máximo de seis meses mediante acuerdos comerciales

127. El Reglamento N° 562/2000, publicado en el marco de la Ley de protección de la infancia N° 58/1992, estableció las normas sobre el funcionamiento y los servicios de las familias que aceptan niños por períodos de hasta seis meses a cambio de una retribución. Estas normas se aplican a las solicitudes de autorizaciones, las condiciones para la concesión de autorizaciones, incluso la edad y la cantidad de niños en cada familia (no más de seis), y también establecen la condición de que la Dirección de Protección de la Infancia habrá de presentar un informe sobre la familia. Se establecen determinadas obligaciones, por ejemplo, el deber de informar al Comité de protección de la infancia cuando resulta evidente que un niño no está bien atendido. También se prevé la supervisión de los hogares por los comités de protección de la infancia.

Comentarios relativos al párrafo 14 de las observaciones finales del Comité

128. En el párrafo 14 el Comité expresa su preocupación por el aumento de la violencia entre los niños y el aumento del alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes. En la información sobre el trabajo de los comités de protección de la infancia se afirma que, en 1998, en 86 casos de los que recibieron notificaciones, el motivo era la sospecha de que un niño había sido víctima de la violencia de otro niño. En 1999 el número de notificaciones realizadas por este motivo fue de 61. En total, los comités de protección de la infancia recibieron 2.359 notificaciones en 1998 (de las cuales la violencia entre niños representó el 3,6%) y 2.638 en 1999 (de las cuales la violencia entre los niños representó el 2,3%).

129. Antes de admitir a un niño en los hogares del Estado para tratamiento de larga duración, tiene que pasar por el centro de diagnóstico de Stuðlar, donde permanece de tres a cuatro meses. Como se puede apreciar por las cifras que figuran a continuación, el 61,7% de las personas para las que se solicitó tratamiento presentaban características de comportamiento violento. Se solicitó tratamiento para un total de 94 personas.

Cuadro 6

Motivos de la solicitud de tratamiento para los niños, por tipo de problema*

Tipo de problema	1997	1998	1999
	(En porcentaje)		
Problemas de comportamiento	88,3	89,3	93,6
Alcoholismo	49,4	73,8	72,3
Carencia de hogar	37,7	60,7	80,9
Aislamiento social	35,1	19	19,1
Drogadicción	33,8	52,4	56,4
Dificultades de aprendizaje	28,6	66,7	83
Ausentismo escolar	22,1	76,2	88,3
Delitos	22,1	39,3	57,4
Conducta violenta	20,8	40,5	61,7
Otros: discapacidades, intimidación, circunstancias familiares difíciles	20,8	1,2	16
Hiperactividad/ trastornos de la atención	9,1	16,7	30,9
Depresión	9,1	15,5	20,2
Víctimas de abusos sexuales	7,8	2,4	4,3
Autores de abusos sexuales	5,2	2,4	2,1
Número de niños para los que se solicitó tratamiento	77	84	94

* Los porcentajes se basan en la frecuencia con que se menciona el "diagnóstico" pertinente en comparación con el número total de solicitudes, pero cada uno de los casos puede corresponder a más de un tipo de problema.

130. Se han realizado muchos esfuerzos por atender los problemas de estos jóvenes, con especial atención a dos esferas principales: en primer lugar, aumentar el número de medidas de tratamiento, y en segundo, que se está investigando, el intercambio de información y las

directrices que se imparten a los comités de protección de la infancia. En lo que respecta a los servicios de tratamiento, el 1º de enero de 1999 se inauguró un nuevo centro en Háholt, Skagafjörður (norte de Islandia). Este centro se especializa en el tratamiento de niños que han dado muestras de violencia contra otros niños. La preocupación por esta esfera ha predominado en la labor de la Dirección de Protección de la Infancia, que ha organizado campañas de publicidad sobre la cuestión, tanto para los profesionales como para el público en general, y ha traído a especialistas extranjeros para que expusiesen sus investigaciones. Se han elaborado directrices especiales para los comités de protección de la infancia sobre la forma de tratar los casos de niños delincuentes, y la Dirección ha prestado su apoyo y asistencia a los comités para el tratamiento de los casos individuales.

Alcoholismo y adicción a las drogas en los jóvenes

131. En los últimos años se han adoptado medidas importantes en la lucha contra el alcoholismo y el abuso de las drogas por los jóvenes. La mayor institución de tratamiento del país para el tratamiento de los alcohólicos y drogadictos, SÁÁ (Centro Nacional de medicina de las adicciones) estableció un departamento especial para los jóvenes.

132. También se ha concedido gran importancia al tratamiento de los niños con problemas de alcoholismo y de drogadicción en las instituciones establecidas por la Dirección de Protección de la Infancia. Así pues, tres de los ocho hogares de tratamiento están especialmente equipados para tratar este tipo de problemas. Además se ha logrado un éxito considerable en el aumento del número de plazas de estos hogares, con lo que disminuyen las listas de espera, y en la actualidad prácticamente no hay demora para conseguir plaza para tratamiento.

Acuerdo entre el Hospital Nacional y Universitario y la Dirección de Protección de la Infancia

133. El 19 de abril de 2000, la Dirección de Protección de la Infancia y el Hospital Nacional y Universitario celebraron un acuerdo de colaboración en una vasta gama de actividades. El objeto de este acuerdo es garantizar a los niños y adolescentes con trastornos psicológicos, problemas de drogadicción y trastornos de comportamiento los mejores servicios, más rápidos y más seguros. El acuerdo abarca el trabajo conjunto para resolver problemas individuales a fin de garantizar los mejores servicios en cada caso, la colaboración en la formación y las campañas para el personal de las instituciones de las dos partes que estén en contacto con niños y jóvenes, y esfuerzos conjuntos por crear el tratamiento adecuado y los servicios para niños y jóvenes que mejor se adapten a cada caso.

Comentarios relativos al párrafo 15 de las observaciones finales del Comité

134. En los últimos años es cada vez menos frecuente que se coloque a los niños en hogares de guarda permanentes. Por otra parte, el número de colocaciones en hogares de guarda provisionales ha aumentado. La colocación provisional es una importante medida a corto plazo que ha dado buenos resultados en los últimos años.

135. El número total de niños colocados en hogares de guarda, de forma permanente o provisional, en 1999 fue de 249, de los cuales 181 en hogares de guarda permanentes y 68 en provisionales. En 1996 se colocó a 29 niños en hogares de guarda (16 permanentemente, 13 con

carácter provisional); en 1997, a 39 niños (20 permanentemente y 19 con carácter provisional); en 1998, a 50 (19 permanentemente y 31 con carácter provisional) y en 1999, (9 permanentemente y 32 con carácter provisional).

136. Si hubo menos niños colocados en hogares de guarda permanentes se debe a que se ha prestado más apoyo a la familia, los niveles de atención profesional son más altos y se da más prioridad a que los niños sigan viviendo con sus padres. No obstante, los hogares de guarda, durante largos o cortos períodos, son una medida importante de protección de la infancia y es probable que lo sigan siendo.

El centro familiar

137. En 1997 se estableció la terapia de centros familiares que se interesa principalmente por las familias con hijos. Se trata de un proyecto de colaboración entre la división de Reykjavik de la Cruz Roja Islandesa, la ciudad de Reykjavik, el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Salud y Seguridad Social. El centro familiar ofrece orientación y apoyo gratuitos a los padres. El objetivo del centro es la asistencia y apoyo a los padres de hijos drogadictos. Se alienta especialmente a solicitar asistencia y orientación a los padres que creen que sus hijos están empezando a tener problemas de alcoholismo o a tomar drogas.

Reglamento N° 426/1999 sobre los niños y los jóvenes en el empleo

138. Este reglamento se dictó en referencia a la Directiva N° 94/33/EC de la Unión Europea sobre la protección de los jóvenes en el trabajo. El reglamento se aplica a los menores de 18 años; en él se especifican los tipos de trabajo que no pueden realizar los jóvenes, las horas de trabajo y de descanso y las normas especiales que se aplican a los niños menores de 15 años y a los que siguen la escolaridad obligatoria.

Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 1999, y Convenio N° 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, de 1973

139. Islandia también ha ratificado los Convenios de la OIT Nos. 182 y 138.

Artículo 11

140. En el segundo informe de Islandia figura una explicación detallada de la situación de la vivienda en el país. Sin embargo, se han realizado importantes cambios en el sistema de la vivienda desde que se elaborara el informe. El 1° de enero de 1999 entró en vigor una nueva Ley de la vivienda, N° 44/1998. La finalidad de la ley se expone en su artículo 1, que se conforma al artículo 11 del Pacto.

"Artículo 1

Finalidad

La finalidad de la presente ley es que, mediante la concesión de préstamos y la organización de los asuntos relacionados con la vivienda, los islandeses gocen de seguridad y de iguales derechos en el ámbito de la vivienda, y asignar fondos con carácter

especial para que la población tenga mayores posibilidades de adquirir o alquilar viviendas en unas condiciones razonables."

141. En 1997 se promulgó una nueva Ley de subsidio del alquiler, N° 138/1997, cuya finalidad también se ajusta al artículo 11 del Pacto:

"Artículo 1

Finalidad

La finalidad de la presente ley es reducir el costo de la vivienda para los inquilinos con bajos ingresos y reducir las diferencias entre las partes en el mercado de la vivienda.

Artículo 2

Subsidio del alquiler

La asistencia prestada con arreglo a la presente ley se facilitará en forma de prestaciones pagadas a los inquilinos; esos pagos se denominarán "subsidio del alquiler".

142. La nueva Ley de subsidio del alquiler de 1997 permitió que más personas tuvieran acceso a esa prestación, y en virtud de una enmienda introducida en 2001 se amplió de nuevo el alcance de la ley para beneficiar en interés particular a los estudiantes y a los discapacitados.

Características básicas de la nueva Ley de la vivienda

143. La nueva Ley de la vivienda introdujo cambios fundamentales en el sistema estatal de préstamos para la vivienda. La ley abolió el Organismo Estatal de la Vivienda y creó en su lugar un fondo especial de préstamos, el Fondo de Préstamos para la Vivienda. Se trata de un fondo estatal independiente que concede préstamos al público para la adquisición de viviendas, y también para la compra y la construcción de casas o apartamentos para alquiler de conformidad con la finalidad declarada de la Ley de la vivienda, que se cita más arriba. No se modificó el sistema general de préstamos, que es un sistema de canje de bonos basado en los bonos para la vivienda. Estos son valores negociables con garantía del Estado que se emiten para un plazo determinado y a un interés fijo, y que pueden comprarse y venderse libremente en el mercado financiero. El sistema funciona de la forma siguiente: el Fondo de Préstamos para la Vivienda intercambia bonos para la vivienda por títulos hipotecarios, respaldados por las hipotecas de los inmuebles de que se trate. A continuación, el Fondo recibe los pagos de los plazos de los títulos hipotecarios de conformidad con las condiciones estipuladas en el bono, en tanto que el vendedor del inmueble obtiene réditos en forma de bonos para la vivienda que pueden venderse en el mercado monetario. En el mercado general de préstamos, el Estado concede préstamos en forma de bonos para la vivienda de entre el 65 y el 70% del precio de compra de un inmueble residencial. La garantía estatal de los bonos para la vivienda asegura a los compradores la obtención de préstamos a unos tipos de interés muy inferiores a los que pueden ofrecerse mediante el sistema bancario ordinario. Además, el Estado ayuda a familias y a particulares a adquirir una vivienda subvencionando indirectamente, a través del sistema impositivo, los tipos de interés de los préstamos hipotecarios mediante bonificaciones de intereses relacionadas con los ingresos.

Viviendas de protección oficial

144. Las principales modificaciones de la legislación sobre la vivienda consistieron en una reestructuración del sistema de préstamos para la adquisición de viviendas de protección oficial, ya que se hizo evidente que el Fondo Estatal de la Vivienda, el elemento del sistema crediticio estatal que financiaba las viviendas de protección oficial, estaba condenado a la insolvencia a menos que se tomaran medidas. El antiguo sistema de préstamos consistía en la subvención directa de los intereses pagados sobre los préstamos para viviendas de protección oficial, independientemente de que se adquirieran o alquilaran viviendas de ese tipo. Dada la diferencia negativa entre los tipos de interés de los créditos concedidos por el Fondo de Construcción de los Trabajadores para financiar la adquisición de viviendas y sus demás préstamos, el Fondo sufría graves pérdidas y había consumido prácticamente la totalidad del capital del Organismo Estatal de la Vivienda.

145. Cuando se creó el Fondo de Préstamos para la Vivienda se abandonó la práctica de subvencionar directamente los intereses de los préstamos hipotecarios, y el Fondo tuvo que asumir las condiciones crediticias que se le ofrecían en el mercado abierto del crédito mediante la venta de bonos con garantía del Estado. Sin embargo, se destinó una suma determinada para subvencionar los préstamos para el alquiler de viviendas durante un período de ajuste de dos años.

146. En el nuevo sistema, las personas cuyos ingresos y patrimonio neto se encuentran dentro de unos límites determinados reciben asistencia adicional en forma de préstamos suplementarios. Éstos vienen a sumarse a los préstamos ordinarios de los bonos para la vivienda, con lo que el nivel de asistencia del Fondo de Préstamos para la Vivienda a que tienen derecho esas personas asciende al 90% del precio de compra de los inmuebles. Los préstamos suplementarios no se basan en un sistema de bonos como los préstamos para vivienda, sino que son créditos financieros directos que el Fondo de Préstamos para la Vivienda financia mediante la venta de una categoría de bonos para la vivienda que son valores negociables especiales con garantía del Estado.

147. Con la garantía estatal de los bonos para la vivienda los recursos del Fondo de Préstamos para la Vivienda destinados a los préstamos suplementarios tienen los tipos de interés más atractivos del mercado monetario de Islandia. El sistema de bonificación de intereses con el respaldo del Estado, cuyo propósito es reducir la carga de la deuda de los grupos con más bajos ingresos, abarca también los préstamos suplementarios.

Apartamentos de alquiler

148. El Fondo de Préstamos para la Vivienda tiene por objeto prestar capital para la construcción y la compra de casas de apartamentos de alquiler a fin de velar por que las personas que no puedan adquirir una vivienda con la ayuda de los préstamos de bonos para la vivienda tengan acceso a viviendas de alquiler a precios razonables. Una parte determinada de esos préstamos estuvo subvencionada durante un período de ajuste en virtud de lo dispuesto en un anexo de la Ley de la vivienda. Con arreglo a la ley, los préstamos se subvencionaron en 1999 y 2000, período después del cual los préstamos para el alquiler de viviendas han de basarse en las condiciones que obtenga el Fondo de Préstamos para la Vivienda en el mercado monetario mediante la emisión de bonos para la vivienda con garantía del Estado. Se supone que con la

garantía del Estado esos préstamos tengan los tipos de interés más bajos en cualquier momento. Los préstamos para el alquiler de viviendas pueden concederse como máximo respecto del 90% del precio de construcción o compra del inmueble. El sistema de bonificación de intereses no abarca las viviendas de alquiler. En cambio, los inquilinos reciben un subsidio del alquiler relacionado con los ingresos.

Comité sobre el mercado y la vivienda de alquiler

149. En relación con las enmiendas legislativas citadas, se creó un Comité especial sobre el mercado y la vivienda de alquiler a fin de investigar formas de garantizar a los grupos de más bajos ingresos el acceso a viviendas de alquiler en condiciones razonables. El Comité ha presentado sus propuestas, en las que se exponen varios medios principales de lograrlo:

- a) El Estado debe aumentar el subsidio del alquiler para atender los gastos crecientes de los inquilinos;
- b) Deben concederse subsidios de instalación a los organismos de alquiler de viviendas gestionados por las autoridades locales y a las organizaciones no gubernamentales que administren o sean propietarias de alojamientos especializados de alquiler, destinados por ejemplo a estudiantes, ancianos, discapacitados y personas con una capacidad de trabajo disminuida.

150. El Comité también recomendó que se llevara a cabo una campaña especial para aumentar la disponibilidad de viviendas de alquiler en la zona del Gran Reykjavik y en otras zonas en expansión donde hubiera una importante necesidad de alojamientos de alquiler. Está a punto de ponerse en marcha una campaña de esta índole, en la que participarán el Ministerio de Asuntos Sociales, el Fondo de Préstamos para la Vivienda y los fondos de pensiones.

Préstamos especializados del Fondo de Préstamos para la Vivienda

151. En la Ley de la vivienda se prevé la creación por la Junta del Fondo de Préstamos para la Vivienda de unos tipos de préstamos distintos de los descritos. Estas categorías de préstamos se definirán en reglamentos especiales. Actualmente existen los siguientes tipos de préstamos:

- 1) Préstamos para la construcción o la adquisición de residencias y centros de atención diurna para los ancianos;
- 2) Préstamos para la construcción de jardines de infancia;
- 3) Préstamos suplementarios para particulares con necesidades especiales;
- 4) Préstamos para reparaciones;
- 5) Préstamos para obras importantes de mantenimiento exterior en las viviendas de protección oficial;
- 6) Préstamos o subvenciones para innovaciones técnicas y otras mejoras en la industria de la construcción;

7) Préstamos para la construcción o la adquisición de residencias para niños o jóvenes.

152. Los préstamos de estas categorías se financian del mismo modo que los préstamos suplementarios y los préstamos para el alquiler viviendas, a saber, mediante la venta de bonos para la vivienda con garantía del Estado.

Subsidio del alquiler

153. El pago del subsidio del alquiler a los inquilinos de viviendas alquiladas se introdujo en virtud de la Ley N° 100/1994, que entró en vigor el 1° de enero de 1995. La ley disponía que las autoridades locales tendrían libertad de decisión en lo relativo al pago de subsidios del alquiler. No se pagarían subsidios a las personas que residieran en viviendas de protección oficial propiedad de las autoridades locales. En el reglamento de desarrollo de la ley se establecieron otras disposiciones acerca de la cuantía de los pagos.

154. El 1° de enero de 1998 entró en vigor una nueva Ley de subsidio del alquiler, N° 138/1997. Uno de los principales cambios que introdujo fue que la decisión de pagar o no un subsidio del alquiler ya no se dejaba a discreción de las autoridades locales, que ahora estaban obligadas a efectuar los pagos. Al mismo tiempo, el sistema se amplió para abarcar a los inquilinos de los inmuebles de protección oficial propiedad de las autoridades locales. Como ya se ha señalado, la Ley N° 138/1997 fue enmendada por la Ley N° 52/2001, que amplió más todavía el acceso al subsidio del alquiler. El cambio más importante que introdujo la nueva ley fue que actualmente las personas que residen en viviendas comunales, como por ejemplo los estudiantes que se alojan en residencias y los discapacitados que viven en hogares especiales, reúnen los requisitos para recibir el subsidio del alquiler.

155. Con arreglo al reglamento enmendado sobre el subsidio del alquiler, N° 4/1999, al 1° de enero de 2000 el subsidio estaba establecido en 8.000 ISK por apartamento, con 7.000 ISK adicionales por el primer hijo, 6.000 por el segundo y 5.500 por el tercero. Además, el 15% de la cuantía del alquiler entre 20.000 y 50.000 ISK era reembolsable. El subsidio del alquiler nunca puede exceder del 50% del alquiler pagado, o, como máximo, de 35.000 ISK. Además, la cuantía del subsidio está relacionada con los ingresos y el patrimonio. El subsidio se reduce en un 1% de los ingresos anuales que superen los 2 millones de ISK. Si los bienes combinados de los inquilinos de una vivienda alquilada superan los 3 millones de ISK, el subsidio se reduce en un 25% de la diferencia.

Viviendas para los discapacitados y residencias

156. En relación con la situación general de las viviendas para discapacitados, consúltese el segundo informe periódico de Islandia, donde figura una explicación detallada respecto de esas viviendas. Se ha seguido trabajando en la creación y la mejora de residencias para los discapacitados, y su número ha aumentado considerablemente. En 1999 el Ministerio de Asuntos Sociales nombró a un grupo de trabajo para que examinara las listas de espera de los servicios de las oficinas regionales encargadas de los asuntos de los discapacitados. El Grupo recomendó un programa de medidas en el plazo de cinco años a fin de eliminar las listas de espera para el acceso a residencias de personas con discapacidad. El programa prevé un incremento de los fondos destinados a la construcción, la adquisición y la administración de residencias para esas personas.

157. En la página Web del Ministerio de Asuntos Sociales puede encontrarse más información sobre las disposiciones legislativas existente en el ámbito de la vivienda (<http://www.felagsmalaraduneyti.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/english-index>).

Artículo 12

El derecho a la salud

158. El derecho a la atención de la salud en Islandia está garantizado por el acceso directo a los centros de atención primaria de la salud, a los médicos privados y a los servicios de urgencias de los hospitales, financiado en parte o en su totalidad por la seguridad social (para más información, véanse las explicaciones relativas al artículo 9). El país se divide en regiones de atención de la salud. Cada una de ellas dispone de sus propios centros de atención primaria, algunos de los cuales se gestionan juntamente con el hospital comunitario local. Los centros de atención primaria de la salud se encargan de administrar un tratamiento y una atención generales, de reconocer a los pacientes, de prestar servicios de enfermería a domicilio y de practicar la prevención en esferas como la planificación familiar, la atención de la salud materna e infantil y la atención de la salud en las escuelas. La información sobre los servicios sanitarios la facilitan el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud. Esta última también supervisa la práctica de los profesionales de sanidad y publica directrices clínicas (para más información véase el informe "Highlights on Health in Iceland", elaborado en colaboración con la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, que puede consultarse en <http://www.who.dk/country/ice01.pdf>).

159. En cumplimiento de la Ley sobre los derechos de los pacientes, N° 74/1997, todo paciente tiene derecho a los mejores servicios sanitarios disponibles. El paciente tiene derecho a recibir información sobre su estado de salud, el tratamiento propuesto, y la posibilidad de solicitar una segunda opinión. Para el tratamiento o la participación en una investigación científica se requiere el consentimiento fundamentado del paciente. Asimismo, el paciente tiene derecho a acceder a su historial médico. En caso de que el paciente no se halle en condiciones de expresar su voluntad, de dar su consentimiento o de hacerse cargo de la información, se aplicarán disposiciones especiales. La ley también contiene disposiciones especiales en relación con los niños enfermos; por ejemplo, si uno de los padres se niega a que el niño reciba un tratamiento necesario, las autoridades responsables del bienestar de la infancia podrán intervenir y autorizar su administración.

160. La Ley sobre el seguro de los pacientes, N° 111/2000, garantiza el derecho de los pacientes a indemnización en determinadas condiciones por daños relacionados con la investigación o provocados por un tratamiento recibido en un hospital, un centro de atención primaria de la salud o en otras instituciones sanitarias, así como por profesionales sanitarios autónomos o durante el transporte del paciente. No es necesario que se determine la culpa del profesional sanitario. El objetivo de la ley es ampliar los derechos de los pacientes y reducir el número de procesos judiciales.

161. La Ley de medicamentos N° 93/1994, tiene por objeto garantizar que la población de Islandia disponga de un suministro adecuado de medicamentos necesarios, distribuidos lo más eficazmente posible sobre la base de una competencia justa y equitativa. Además, tiene por objeto velar en la medida de lo posible por la calidad y la seguridad de los medicamentos y los

servicios médicos, fomentar la educación pública sobre el empleo de medicamentos, evitar su uso excesivo y mantener los costos a un nivel mínimo. Principalmente se encarga de administrar y de aplicar la ley el Organismo de Control de Medicamentos de Islandia (creado en noviembre de 2000), que puede someter sus decisiones al Ministro de Salud.

162. La Ley de dispositivos médicos, N° 16/2001, se aplica a la producción, la venta, la comercialización, la supervisión, el mantenimiento y el uso de dispositivos médicos. La finalidad de la ley es proteger a los usuarios de esos dispositivos de posibles daños, y velar por que su producción, mantenimiento y uso sean conformes a los conocimientos profesionales más avanzados del momento.

163. El objetivo de la Ley sobre bancos biológicos, N° 110/2000, es autorizar la recopilación, el almacenamiento, la manipulación y la utilización de muestras biológicas de seres humanos de modo que se garantice la confidencialidad, que se salvaguarden los intereses de los donantes de las muestras y que éstas se utilicen de forma que ayude a cumplir los objetivos de la ciencia y la medicina y que beneficie a todos. Los intereses de la ciencia y de la comunidad nunca deberán tener prioridad sobre los del donante de una muestra biológica. Se prohíbe discriminar al donante de una muestra biológica sobre la base de información obtenida de dicha muestra. El principio fundamental de la ley es que se requerirá el consentimiento libre y fundamentado del donante al recopilar una muestra biológica para su conservación en un banco biológico.

164. La Ley sobre la base de datos de la sanidad, N° 139/1998, tiene por objeto autorizar la creación y la administración de una base de datos centralizada de información sanitaria, procedente de historiales médicos y anónima, con el fin de ampliar los conocimientos necesarios para mejorar la salud y los servicios de salud. La base de datos de la sanidad contendrá solamente información codificada de historiales médicos. La transferencia de la información a la base de datos se basa en la presunción de consentimiento, aunque el paciente tiene derecho a negarse. La información procedente de la base de datos siempre se referirá a grupos (información estadística). Está prohibido divulgar información sobre individuos de la base de datos: la violación de esta disposición se castigará con la inhabilitación profesional, multa o prisión. La protección del paciente se garantiza además en virtud de la codificación irreversible de la información, la limitación del acceso a la base de datos y la supervisión por parte del Organismo de Protección de Datos. Esta legislación no se aplica al almacenamiento o la manipulación de muestras biológicas o al acceso a éstas, y la base de datos de la sanidad no contendrá ningún tipo de material genético.

Política nacional en materia de salud

165. En mayo de 2001 el Althing aprobó la nueva Política nacional en materia de salud, presentada por el Ministro de Salud. Las esferas prioritarias hasta el año 2010 son: i) el alcohol, otras drogas y el tabaco; ii) los niños y los adolescentes; iii) las personas de edad; iv) la salud mental; v) las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares; vi) el cáncer; y vii) los accidentes.

166. Además, en la primavera de 2001 el Althing promulgó amplias enmiendas a la Ley sobre el tabaco. El objetivo es reducir el consumo del tabaco y de otros productos derivados, así como la contaminación del aire en espacios cerrados debida al humo del tabaco. La ley enmendada

también impone nuevos obstáculos a la venta de productos del tabaco y hace más eficaz la prohibición de su publicidad.

167. La Dirección General de Salud viene ejecutando desde 1994 un programa titulado Promoción de la salud. Se basa en la Política nacional en materia de salud y en el proyecto Salud para todos en el Siglo XXI de la OMS, y tiene por objeto mejorar el estilo de vida de la población. En el marco del programa, que se aplica tanto a nivel nacional como regional, se asesora a las autoridades en materia de política sanitaria, se realizan trabajos de investigación, se recaban conocimientos en el ámbito de la promoción de la salud y se coopera con profesionales en proyectos destinados a fomentar la salud y el bienestar. Además, se informa al público en general sobre diversas cuestiones relacionadas con la salud.

Política nacional de fomento de la calidad

168. El Ministerio de Salud y de la Seguridad Social publicó en 1999 la Política nacional de fomento de la calidad, que refleja políticas de Noruega, Suecia y Dinamarca y del proyecto Salud para todos en el siglo XXI de la OMS. Su finalidad es construir estructuras y procesos en todas las instituciones de atención de la salud destinado a la promoción continua de la calidad para finales del año 2002. Los principales agentes a nivel nacional son el Ministerio de Salud y de la Seguridad Social y la Dirección General de Salud. A nivel local son los organismos de atención de la salud, los servicios administrativos de los hospitales y de los centros de atención primaria de la salud, los proveedores de atención de la salud y los consumidores.

El sano desarrollo de los niños y la reducción de la mortalidad infantil

169. La atención de la salud de la madre durante el embarazo y de los niños de corta edad es gratuita. La salud materna se supervisa mediante reconocimientos mensuales durante el embarazo (de ocho a diez reconocimientos). Los niños pequeños son examinados periódicamente y vacunados, al igual que los niños en edad escolar. Esta atención es gratuita. En 1998, la tasa de mortalidad infantil en Islandia era de 2,6 por 1.000 nacidos vivos.

Fecundación artificial

170. La fecundación artificial (a saber, la concepción resultante de una inseminación artificial o de una fecundación in vitro) se rige por la Ley de fecundación artificial, N° 55/1996. Según la ley, las condiciones para practicar este procedimiento son que la mujer vive con el hombre, que la pareja tenga una edad que se considere normal para la procreación, que su salud física y mental y su situación social sean buenas y que los demás tratamientos para superar la infertilidad hayan fracasado o no se disponga de ellos. Además, la ley contiene disposiciones relativas a la inseminación artificial con esperma de donantes y al uso de embriones en la investigación. Por norma general, se prohíben los experimentos, la investigación y las operaciones de cualquier tipo que requieran el uso de embriones. La seguridad social sufraga en parte el costo del procedimiento de fecundación artificial

Mejora de la higiene ambiental e industrial

171. La regulación del medio ambiente natural y de las condiciones ambientales en el lugar de trabajo se llevan a cabo principalmente a través de la Ley sobre la higiene y la prevención de la

polución, N° 7/1998, la Ley sobre los alimentos, N° 93/1995, y la Ley sobre las condiciones ambientales, la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo, N° 46/1980. La labor de vigilancia e investigación en esta esfera la desempeñan organismos especiales dependientes del Ministerio del Medio Ambiente (para obtener información sobre la calidad del aire, el agua y el saneamiento y el tratamiento de residuos véase el informe "Highlights on Health in Iceland", página 24, que puede consultarse en <http://www.who.dk/country/ice01.pdf>).

Enfermedades epidémicas

172. La Ley sobre enfermedades epidémicas, N° 19/1997, contiene disposiciones sobre medidas de preparación y respuesta ante este tipo de enfermedades, así como sobre los deberes de los particulares, los médicos, los demás profesionales sanitarios y los veterinarios. Además, en ella se estipulan las respuestas de los organismos oficiales al peligro de las enfermedades epidémicas dentro y fuera del país. La ley creó en la Dirección General de Salud el cargo especial del epidemiólogo del Estado, que se encarga del control de las enfermedades infecciosas en Islandia. El epidemiólogo colabora con otros médicos, con el jefe de los servicios de veterinaria y con el Organismo de los Alimentos y el Medio Ambiente cuando es necesario. También se encarga de mantener el registro de las enfermedades infecciosas en Islandia.

Artículos 13 y 14

Enseñanza obligatoria y gratuita para todos

173. Véase el párrafo 143 del segundo informe periódico.

174. Según la Ley sobre la enseñanza obligatoria, N° 66/1995, la función de la escolaridad obligatoria es preparar a los alumnos, en colaboración con la familia, para la vida y el trabajo en una sociedad democrática en continuo desarrollo. Así pues, las prácticas y los métodos escolares se caracterizarán por la tolerancia, la ética cristiana y la cooperación democrática. La escuela fomentará la amplitud de miras de sus alumnos y su entendimiento de las diversas circunstancias de las personas y de sus entornos vitales, de la sociedad islandesa, de su historia y características únicas y de las responsabilidades del individuo para con la sociedad.

175. El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura supervisa la aplicación de las leyes y los reglamentos en materia de educación en el marco de la enseñanza obligatoria, y se encarga de publicar el plan de estudios nacional. En 1999 se publicó un nuevo plan de estudios nacional para la enseñanza obligatoria. Además, el Ministerio es el encargado de organizar los exámenes nacionales sobre materias fundamentales que se realizan en el cuarto y el séptimo grado, las inspecciones coordinadas de los centros escolares y los exámenes finales del décimo grado.

176. Si bien los municipios se han hecho cargo de la administración de las escuelas obligatorias, el Estado sigue ocupándose de la publicación de todo el material escolar, que es gratuito. Además, el Estado también financia los fondos de desarrollo de este nivel de la enseñanza, así como parte de la capacitación en el empleo de los maestros.

177. Desde que en 1996 el Gobierno central transfirió a los municipios el control de las escuelas obligatorias, la fusión de municipios ha aumentado considerablemente. Al 1° de diciembre de 2000 había 124 municipios, frente a 170 en 1995. Las fusiones han facilitado la transferencia,

con lo que se han reducido las posibles diferencias entre los municipios ricos y los menos ricos. Además, algunos ayuntamientos tienen derecho a obtener financiación del Fondo de Equiparación de Municipios para sufragar las actividades escolares más costosas, como la educación especial.

178. Al nivel de la enseñanza obligatoria, la asistencia a las escuelas es del 100%.

Disponibilidad y accesibilidad de la enseñanza secundaria

179. Véanse los párrafos 144 a 147 del segundo informe periódico.

180. En primavera de 1996 se publicó en una serie de folletos un nuevo plan de estudios nacional para las escuelas secundarias, conforme a la Ley de 1996 (parte VIII, art. 21), que entró en vigor el 1º de junio de 1999. El propósito del plan de estudios es garantizar que cada alumno se matricule en un programa que se adapte a sus necesidades en el marco de la enseñanza secundaria, y que el ritmo al que finalice sus estudios se base en parte en sus capacidades.

Mayor autonomía y evaluación de la calidad en la enseñanza superior

181. En diciembre de 1997 se promulgó una nueva Ley marco sobre la enseñanza superior (Nº 136/1997). La promulgación de la ley ha concedido a las instituciones de enseñanza superior de Islandia una mayor autonomía, y ha modificado las relaciones entre dichas instituciones y el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Más que intervenir en los asuntos particulares de las instituciones, el Ministerio se centra ahora en la concertación de acuerdos y en su labor de supervisión.

182. En mayo de 1999 el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura publicó un reglamento (Nº 331/1999) sobre la evaluación de la calidad y la supervisión de la enseñanza universitaria, que exige a las universidades que establezcan un sistema oficial de evaluación interna de la calidad. El reglamento también dispone que el Ministerio tendrá la facultad de decidir cuándo deberá realizarse una evaluación externa de la calidad, y nombrará a los especialistas del grupo que la lleve a cabo.

183. Recientemente, el Gobierno ha firmado nuevos contratos de financiación con cada una de las instituciones de enseñanza superior (tanto públicas como privadas), por lo cual ha establecido normas uniformes para la subvención pública de esas instituciones. El primer acuerdo de esta índole se firmó con la Universidad de Islandia en 1999. Los contratos tienen por objeto financiar las actividades docentes (no de investigación) de las instituciones de enseñanza superior y se basan en los resultados, es decir que las contribuciones económicas se hacen en función del número de actividades de carácter formativo.

Comentarios en respuesta al párrafo 17 de las observaciones finales del Comité

184. En el párrafo 17 de sus observaciones finales, el Comité advierte con preocupación la alta tasa de deserción de la enseñanza secundaria. Según las estadísticas, en los últimos años el 89% de los jóvenes de 16 años que han finalizado la enseñanza obligatoria han ingresado en escuelas secundarias; sin embargo, algunos alumnos no terminan la enseñanza secundaria a la edad

prevista para ese nivel, aunque en muchos casos esos estudiantes reanudan sus estudios más tarde.

185. Todos los estudiantes que han finalizado la enseñanza obligatoria tienen derecho por ley a matricularse en una escuela secundaria, independientemente de los resultados que hayan obtenido. La Ley sobre la enseñanza secundaria de 1996 tiene por objeto adaptar mejor los centros de secundaria a las necesidades de los estudiantes, ofreciendo entre otras cosas una mayor variedad de clases. Por ejemplo, se ha creado un nuevo programa general de estudios para los alumnos que no hayan decidido todavía qué itinerario quieren seguir tras la enseñanza obligatoria o que precisen una mayor preparación para realizar estudios académicos o de formación profesional. En la Ley de 1996 también se prevén diversos requisitos de admisión a distintos programas de estudio a fin de reducir el número de alumnos que se matriculan en programas para los que no están suficientemente preparados. A partir del año escolar de 2001-2002 entrará en vigor un reglamento (Nº 98/2000) sobre los diversos requisitos de admisión. Además, muchas escuelas secundarias se esfuerzan en atender las necesidades de sus alumnos, ofreciéndoles por ejemplo clases de recuperación en materias básicas. Todas las escuelas secundarias disponen también de servicios de orientación académica.

186. La flexibilidad del sistema de créditos que utilizan la mayoría de los centros de secundaria ayuda a que reanuden sus estudios los alumnos que los hayan abandonado o que hayan dejado temporalmente la escuela. Los programas de noche que ofrecen muchas escuelas secundarias también conceden una segunda oportunidad a los alumnos que han dejado los estudios. El abandono temporal o definitivo de los estudios puede explicarse en parte por la demanda de mano de obra que hay en el país, siendo el desempleo casi inexistente.

187. El Comité observa también en el párrafo 17 que el 60% de los licenciados universitarios son mujeres y sólo un 40% hombres. Esta diferencia puede explicarse, entre otras cosas, por el hecho de que los campos educativos que tradicionalmente elige la mujer, como la enfermería, la enseñanza preescolar y la pedagogía social, han ascendido en los últimos años al nivel de la enseñanza superior, en tanto que los estudios por los que tradicionalmente optan los hombres siguen ofreciéndose al nivel de secundaria en las escuelas de formación profesional. Más mujeres que hombres realizan el examen de matriculación que se requiere generalmente para los estudios de nivel superior. Los graduados de los estudios de formación profesional del nivel de secundaria, la mayoría de los cuales son varones, no han tenido acceso directo a la enseñanza superior. Sin embargo, el nuevo plan de estudios nacional para las escuelas secundarias ofrece la posibilidad de presentarse al examen de matriculación después de finalizar los estudios de formación profesional. Esta disposición facilitará el acceso a la enseñanza superior tras la formación profesional.

188. En cuanto a la observación del Comité de que la transferencia del control de las escuelas del Gobierno central a los municipios podría acrecentar las diferencias entre éstos, véase el párrafo 177. Como ya se ha dicho, la fusión de los municipios ha facilitado en gran medida la transferencia, con lo que se han reducido las posibles diferencias entre los municipios ricos y los menos ricos. Además, algunos municipios tienen derecho a recibir financiación del Fondo de Equiparación de Municipios para sufragar algunas de las actividades escolares más costosas, como la educación especial.

Estadísticas sobre educación

189. Véase el párrafo 153 del segundo informe periódico. En 2000, había 190 escuelas obligatorias en Islandia con 43.644 alumnos. En ese mismo año las escuelas secundarias eran 40, con 17.961 estudiantes. En 1998, el gasto público en educación en Islandia representó el 15,08% del gasto total y el 5,8% del PIB.

Créditos públicos para la enseñanza

190. Véanse los párrafos 156 y 158 del segundo informe periódico. La ley vigente relativa a los centros de preescolar se promulgó en 1994. En su artículo 1 se define la enseñanza preescolar como el nivel inicial del sistema educativo. La administración de los centros de preescolar incumbe a los municipios, que también se encargan de financiar la construcción de las escuelas obligatorias. Sin embargo, el Estado costea (60%) junto con los municipios (40%) la construcción de las escuelas secundarias. En los últimos años, muchos municipios, especialmente los más importantes, han construido nuevas escuelas de enseñanza obligatoria o bien han ampliado las que ya existían a fin de ofrecer instalaciones menos dispersas.

191. En 1999 se publicaron nuevos planes de estudios nacionales para la enseñanza preescolar, obligatoria y secundaria. Estos planes desarrollan las leyes vigentes y tienen el rango jurídico de reglamentos ministeriales. En ellos se interpretan los artículos de la ley y se especifican más concretamente los aspectos que han de coordinarse en todas las escuelas obligatorias de Islandia. Además, los planes de estudio nacionales determinan para cada centro y su personal la forma en que se organizará, ejecutará y evaluará la enseñanza. Los planes de estudios nacionales se aplican a todos los grados y materias.

192. En el año académico de 2000-2001, las horas de clase semanales que sigue cada alumno en las escuelas obligatorias son las siguientes:

- grados 1º a 4º: 30 horas de clase por semana;
- grados 5º y 6º: 32 horas de clase por semana;
- grados 7º a 10º: 35 horas de clase por semana.

En el año escolar de 2001-2002, los alumnos de 7º grado tendrán 35 horas de clase a la semana, y los de los grados 8º a 10º, 37 horas. El promedio de horas de clase en las escuelas secundarias es de 35 semanales.

193. Tradicionalmente, en Islandia la educación se ha organizado dentro del sector público. En el sistema escolar hay muy pocas instituciones privadas.

Igualdad de acceso a la educación

194. Uno de los principios fundamentales del sistema educativo de Islandia es la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a la enseñanza, independientemente del sexo, la situación económica, el lugar de domicilio, la religión o los orígenes culturales o sociales. La enseñanza es obligatoria de los 6 a los 16 años, por lo que se exige a todos los niños de esas edades que asistan a la escuela a tiempo completo. Los estudiantes tienen derecho por ley a

ingresar en las escuelas secundarias independientemente de los resultados que hayan obtenido en la enseñanza obligatoria. Normalmente, los alumnos de la enseñanza superior han tenido que aprobar el examen de matrícula u otro equivalente. En Islandia la educación es gratuita, si bien los estudiantes de los niveles de enseñanza secundaria y superior pagan derechos de matrícula.

195. En cuanto a la igualdad de oportunidades para acceder a la educación en las universidades, conviene señalar el fallo del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1999, en el que el Tribunal determinó que la Universidad de Islandia no había cumplido su obligación en virtud de la Ley sobre las personas discapacitadas, el artículo 2 del Protocolo N° 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a la educación, y el artículo 65 de la Constitución, relativo al principio de igualdad, ya que no había formulado una política relativa a los alumnos con discapacidad y no había facilitado a una estudiante ciega de la Universidad la asistencia que requería en sus estudios. El fallo se describe con mayor detalle en la sección I B) del presente informe.

196. Los alumnos que dejan la localidad donde están empadronados para asistir a la escuela secundaria en otro lugar reciben una ayuda del Gobierno para cubrir en parte los gastos de viaje y de subsistencia. Los alumnos de la enseñanza superior tienen acceso al Fondo de Préstamos para Estudiantes del Gobierno de Islandia.

Grupos vulnerables y desfavorecidos

197. Véase el párrafo 166 del segundo informe periódico. Según el artículo 36 de la Ley sobre la enseñanza obligatoria, N° 66/1995, y el artículo 20 de la Ley sobre la enseñanza secundaria, N° 80/1996, los estudiantes cuya lengua materna no sea el islandés tendrán derecho a asistir a cursos especiales en ese idioma.

198. Conforme a un reglamento (N° 391/1996) sobre la enseñanza obligatoria relativo a la instrucción en islandés para los alumnos de otra lengua materna, esos alumnos podrán estudiar en su idioma materno siempre que así pueda disponerse y lo autorice el municipio correspondiente. La finalidad es que los alumnos practiquen ambos idiomas, y que mantengan de este modo su lengua materna usándola de forma activa. En el caso de la enseñanza secundaria se aplica un reglamento relativo a la enseñanza especial en islandés para los estudiantes de otra lengua materna (N° 329/1997). Actualmente, los planes de estudios nacionales para las escuelas de enseñanza obligatoria y secundaria contienen por primera vez disposiciones relativas a la enseñanza especial en islandés para los alumnos de otra lengua materna.

Artículo 15

199. Véanse los párrafos 174 a 181 del segundo informe periódico.

200. Actualmente, el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura prepara un nuevo modelo de financiación pública de la investigación en el marco de la enseñanza superior, y está negociando a este respecto con la Universidad de Islandia. Los nuevos acuerdos de investigación se basarán más en los resultados y establecerán normas generales para la financiación pública de la investigación en las instituciones de enseñanza superior.
